

Desigualdad social multidimensional

Avances hacia
una propuesta de
medición regional

Alberto Arenas de Mesa
Andrés Espejo
Ernesto Espíndola
José Joaquín Prieto
Pablo Herrera



NACIONES UNIDAS

CEPAL

**Ford
Foundation**

Gracias por su interés en esta publicación de la CEPAL



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Si desea recibir información oportuna sobre nuestros productos editoriales y actividades, le invitamos a registrarse. Podrá definir sus áreas de interés y acceder a nuestros productos en otros formatos.

Deseo registrarme

Conozca nuestras redes sociales y otras fuentes de difusión en el siguiente link:



<https://bit.ly/m/CEPAL>



SERIE

SERIE POLÍTICAS SOCIALES

250

Desigualdad social multidimensional

Avances hacia una propuesta
de medición regional

Alberto Arenas de Mesa

Andrés Espejo

Ernesto Espíndola

José Joaquín Prieto

Pablo Herrera



NACIONES UNIDAS



**Ford
Foundation**

Este documento fue preparado por Alberto Arenas de Mesa, Director de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junto con Andrés Espejo, Oficial de Asuntos Económicos, Ernesto Espíndola, Asistente Superior de Investigación, y José Joaquín Prieto y Pablo Herrera, Consultores, todos de la misma División. El documento fue elaborado en el marco de un proyecto de cooperación entre la CEPAL y la Fundación Ford.

Los autores agradecen a Daniela Trucco, Rodrigo Martínez, Carlos Maldonado, Claudia Robles, María Luisa Marinho, Amalia Palma, Daniela Huneeus y Nincen Figueroa, de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Asimismo, agradecen a Rolando Ocampo, Xavier Mancero, Pablo Villatoro y Álvaro Fuentes, de la División de Estadísticas de la CEPAL, por sus valiosos comentarios en las reuniones de difusión preliminar de resultados. Finalmente, agradecen la desinteresada colaboración y el acompañamiento técnico brindado por el Profesor James Foster.

Las Naciones Unidas y los países que representan no son responsables por el contenido de vínculos a sitios web externos incluidos en esta publicación.

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización o las de los países que representa.

Publicación de las Naciones Unidas
ISSN: 1680-8983 (versión electrónica)
ISSN: 1564-4162 (versión impresa)
LC/TS.2026/47
Distribución: L
Copyright © Naciones Unidas, 2026
Todos los derechos reservados
Impreso en Naciones Unidas, Santiago
S.2600226[S]

Esta publicación debe citarse como: Arenas de Mesa, A., Espejo, A., Espíndola, E., Prieto, J. J., y Herrera, P. (2026). Desigualdad social multidimensional: avances hacia una propuesta de medición regional. *Serie Políticas Sociales* (250) (LC/TS.2026/47). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Documentos y Publicaciones, publicaciones.cepal@un.org. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción.

Índice

Resumen	7
Introducción	9
I. Hacia una medición multidimensional de la desigualdad	11
A. La desigualdad más allá de los ingresos	13
B. Desigualdades sociales en dimensiones clave del bienestar	15
1. Educación: desigualdades que se acumulan desde la primera infancia	15
2. Salud: brechas sanitarias persistentes en una región en transición	16
3. Vivienda y su entorno: habitar la desigualdad	17
4. Empleo: trabajo precario y protección desigual frente al desafío de la inclusión laboral	17
C. La acumulación de desventajas como mecanismo de la desigualdad social	18
II. Debates sobre la medición de la desigualdad multidimensional	21
A. Tableros de indicadores vs. índices compuestos	21
B. Desafíos en la construcción de un índice compuesto	23
C. Métodos para la construcción de índices compuestos multidimensionales	24
1. Agregación primero las filas (por individuos)	25
2. Agregación primero las columnas (por dimensiones)	26
D. Propiedades deseables de las medidas multidimensionales	27
1. Simetría (anonimato)	28
2. Invariancia al tamaño poblacional	28
3. Invariancia de escala (medición relativa)	28
4. Normalización (cota cero en igualdad)	28
5. Principio de transferencias progresivas de Pigou-Dalton	28
6. Sensibilidad a la dependencia entre dimensiones	29
7. Independencia del orden de agregación	29
8. Descomponibilidad por subgrupos poblacionales	29
9. Descomposición por dimensiones	29
10. Robustez frente a cambios normativos moderados	30

E.	Supuestos normativos y operativos de cada enfoque	30
1.	Selección de dimensiones	30
2.	Ponderación de dimensiones	31
3.	Escalas y transformaciones de variables.....	31
4.	Supuestos de sustitución/complementariedad	31
5.	Datos requeridos e integrabilidad	32
6.	Tratamiento de la heterogeneidad subnacional	32
III.	Abordaje metodológico para la construcción de un índice de desigualdad multidimensional (IDM)	35
A.	Principios orientadores.....	35
1.	Ser comprensible y fácil de describir	35
2.	Ajustarse a una noción de desigualdad de sentido común	36
3.	Ajustarse al propósito para el que se está desarrollando	36
4.	Ser técnicamente sólido.....	36
5.	Ser operativamente viable	37
6.	Ser fácilmente replicable.....	37
7.	Respetar los incentivos de cada país	37
B.	Selección de dimensiones e indicadores	38
1.	Selección de indicadores específicos.....	38
2.	Ponderación de dimensiones.....	38
3.	Definiciones armonizadas.....	38
C.	Alcance empírico y decisiones de operacionalización	39
1.	Criterios de operacionalización y consideraciones de comparabilidad	39
2.	Dos versiones del índice: propuesta normativa e implementación empírica	40
D.	Formulación de un índice de desigualdad social multidimensional.....	41
1.	Forma de agregación adecuada	41
2.	Descomposición del índice de desigualdad multidimensional.....	41
3.	Normalización y calibración de las variables.....	42
4.	Agregación de dimensiones en la unidad de análisis	43
5.	Medición de la desigualdad sobre el bienestar multidimensional.....	44
6.	Ventajas y desafíos del Índice de Desigualdad Social Multidimensional (IDM)	44
IV.	Evidencia empírica: medición de la desigualdad social multidimensional en América Latina	47
A.	Fuente de datos y cobertura	47
B.	Dimensiones y variables	48
1.	Ingreso.....	48
2.	Educación.....	48
3.	Salud	49
4.	Hacinamiento	49
5.	Empleo y pensiones.....	49
C.	Ponderaciones normativas	50
D.	Resultados	50
1.	Resultados para el escenario base regional (en torno a 2023)	50
2.	Lectura comparada de perfiles nacionales	54
V.	Reflexiones finales y agenda futura	57
	Bibliografía	59
	Serie Políticas Sociales: números publicados	63

Cuadros

Cuadro 1	Comparación entre la propuesta normativa y la implementación empírica del IDM.....	40
Cuadro 2	Dimensiones, indicadores y fuentes de la implementación empírica	50

Gráficos

Gráfico 1	América Latina (13 países): curvas de Lorenz promedio por dimensión de desigualdad, alrededor de 2023.....	51
Gráfico 2	América Latina (13 países): curvas de Lorenz para desigualdad multidimensional observada y máxima posible, alrededor de 2023	53
Gráfico 3	América Latina (13 países): desigualdad multidimensional observada y máxima posible por país, alrededor de 2023.....	53

Diagrama

Diagrama 1	América Latina (13 países): coeficientes de Gini por país y dimensión, alrededor de 2023	52
------------	--	----

Resumen

América Latina y el Caribe se mantiene como una de las regiones más desiguales por ingreso del mundo. En un escenario caracterizado por bajo dinamismo económico, crecientes tensiones geopolíticas y un aumento del malestar social, la región enfrenta una trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social. Esta dinámica limita la capacidad de avanzar hacia trayectorias de desarrollo más inclusivas y sostenibles. En este marco, la desigualdad debe abordarse desde una perspectiva multidimensional que trasciende el ingreso y se expresa en ámbitos clave del bienestar, como la educación, la salud, la vivienda y el empleo.

Frente a estos desafíos, el documento propone un enfoque conceptual y metodológico para fortalecer la medición en la región, basado en marcos analíticos y debates internacionales recientes. A partir de este enfoque, desarrolla un ejercicio pionero que aplica la metodología propuesta por Foster y Lokshin (2024) para la construcción de un índice de desigualdad multidimensional en países de América Latina, contribuyendo así a fortalecer la base de evidencia para el diseño de políticas públicas más integrales.

Introducción

América Latina y el Caribe continúa siendo una de las regiones más desiguales del mundo. A pesar de avances parciales registrados durante el ciclo de crecimiento de la primera década del siglo XXI, la distribución del ingreso sigue siendo altamente concentrada, con un índice de Gini de 0,452 en 2024 (CEPAL, 2025). Esta persistencia no responde a factores coyunturales, sino a un rasgo estructural del estilo de desarrollo de la región, asociado a una trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social.

Desde la perspectiva de la CEPAL, la desigualdad constituye un fenómeno multidimensional y estructural, profundamente arraigado en la heterogeneidad productiva, en legados históricos persistentes y en una institucionalidad social fragmentada. En este sentido, la desigualdad no solo es un resultado del funcionamiento de los mercados laborales, sino también un determinante central de la capacidad de las economías para crecer, generar empleo de calidad, fortalecer la cohesión social y sostener procesos que avancen hacia el desarrollo social inclusivo.

En la coyuntura actual —caracterizado por un bajo dinamismo económico, crecientes tensiones geopolíticas y un aumento del malestar social— la desigualdad ha vuelto a posicionarse en el centro del debate sobre las estrategias nacionales de desarrollo. Tal como ha señalado la CEPAL, la región enfrenta tres trampas del desarrollo interrelacionadas: i) una trampa de baja capacidad para crecer; ii) una de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social; y iii) de bajas capacidades institucionales y débil gobernanza (CEPAL, 2024a). La interacción entre estas trampas refuerza las restricciones estructurales que limitan la capacidad de los países para avanzar hacia trayectorias de desarrollo más productivos, inclusivos y sostenibles.

La desigualdad en la región trasciende ampliamente la dimensión monetaria. Se manifiesta en múltiples ámbitos del bienestar —como el acceso a educación de calidad, a los servicios de salud, a una vivienda adecuada, a un empleo decente y a la protección social— y afecta de manera diferenciada a distintos grupos de la población (CEPAL, 2024a). Estas brechas se estructuran en torno a ejes persistentes de estratificación social, como el nivel socioeconómico, el género, el origen étnico-racial, la edad y el territorio, configurando patrones sistemáticos de exclusión y desventaja.

La matriz de la desigualdad social desarrollada por la CEPAL permite comprender cómo estas dimensiones y ejes de diferenciación se entrecruzan, generando un entramado de desigualdades superpuestas que se refuerzan mutuamente a lo largo del ciclo de vida (CEPAL, 2016a). Este carácter

acumulativo y relacional de la desigualdad implica que las privaciones en una dimensión tienden a amplificarse en otras, dando lugar a trayectorias persistentes de desventaja que limitan la movilidad social y reproducen la desigualdad entre generaciones.

Diversos factores estructurales explican la persistencia de estos patrones. En línea con la CEPAL, se identifican siete factores clave, entre los que destacan la heterogeneidad productiva y la segmentación del mercado laboral; las brechas en el desarrollo de capacidades, particularmente en educación y formación; las desigualdades de género y otros ejes estructurantes de la matriz de desigualdad social; las limitaciones de los sistemas de protección social; la baja capacidad redistributiva de los sistemas tributarios; y los altos niveles de segregación territorial. Estos factores no operan de manera aislada, sino que interactúan entre sí, reforzando la reproducción de la desigualdad y dificultando su reducción mediante intervenciones parciales (CEPAL, 2024a).

Las consecuencias de este escenario son profundas. Desde una perspectiva normativa, la desigualdad restringe el ejercicio de derechos fundamentales y limita el desarrollo humano, lo que resulta inaceptable en términos de justicia social. Desde una perspectiva funcional, debilita la cohesión social, erosiona la confianza en las instituciones y afecta negativamente la gobernabilidad democrática. Asimismo, constituye un obstáculo para el crecimiento económico, al limitar la acumulación de capacidades, reducir la productividad y restringir el potencial de innovación de las economías (CEPAL, 2024a; CEPAL, 2018, Salazar-Xirinachs y Llinás, 2023).

En este contexto, la CEPAL ha planteado la necesidad de avanzar hacia un enfoque de desarrollo social inclusivo, que sitúe la reducción de la desigualdad en el centro de las estrategias de desarrollo. Este enfoque, plasmado en la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (ARDSI), aprobada por los países de la región en la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en 2019, promueve una estrategia de desarrollo centrada en las personas donde se fortalezcan los sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes, bajo el principio del universalismo sensible a las diferencias, con el objetivo de garantizar niveles de bienestar acordes al desarrollo económico de las sociedades y asegurar el ejercicio pleno de derechos (CEPAL, 2020; CEPAL, 2025).

Avanzar en esta dirección requiere no sólo fortalecer las políticas públicas, sino también mejorar las herramientas analíticas disponibles para comprender y medir la desigualdad en toda su complejidad. En particular, los enfoques tradicionales centrados exclusivamente en el ingreso resultan insuficientes para capturar la naturaleza multidimensional del fenómeno, así como la interdependencia y acumulación de desventajas que caracterizan a la región (CEPAL, 2025a).

En este marco, el presente documento tiene como objetivo proponer un enfoque conceptual y metodológico para la medición de la desigualdad social multidimensional en América Latina y el Caribe. Para ello, se articulan distintos marcos teóricos —incluyendo el enfoque de capacidades, la matriz de desigualdad social y la literatura sobre acumulación de desventajas— y se revisan críticamente las principales estrategias metodológicas existentes. Sobre esta base, se desarrolla una propuesta de medición basada en el marco de Foster y Lokshin (2024), junto con una aplicación empírica para un conjunto de países de la región. En este sentido, el documento constituye un esfuerzo pionero al aplicar una nueva metodología para la construcción de un índice de desigualdad multidimensional y su implementación en países de América Latina.

El documento se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, se presenta el marco conceptual que sustenta la medición multidimensional de la desigualdad. En segundo lugar, se revisan los principales debates metodológicos en torno a su medición. En tercer lugar, se expone la propuesta metodológica adoptada y sus decisiones de diseño. Posteriormente, se presentan los resultados de su aplicación empírica en países de la región. Finalmente, se discuten las implicancias del análisis y se proponen líneas de trabajo futuras para fortalecer la medición y el abordaje de la desigualdad en la región.

I. Hacia una medición multidimensional de la desigualdad

Frente a un fenómeno tan complejo y multifacético como la desigualdad, surge la pregunta clave de cómo medirla de forma adecuada. Tradicionalmente, los análisis se han centrado en las disparidades de ingreso, dado que el ingreso monetario tiene un impacto directo en el bienestar material y en las oportunidades de las personas. Durante décadas, este ha sido el principal eje de estudio en la evaluación de la desigualdad (CEPAL, 2016a). La CEPAL, por ejemplo, ha contribuido de manera destacada a la medición de la desigualdad de ingresos en la región y al estudio de sus determinantes, señalando la persistencia de altos niveles de concentración incluso en contextos de crecimiento económico (CEPAL, 2014).

Esta discusión adquiere mayor relevancia en una región marcada por una trampa de alta desigualdad y baja movilidad social, donde las brechas persistentes en diversas dimensiones del bienestar limitan las oportunidades, debilitan la cohesión social y restringen el desarrollo social inclusivo (CEPAL, 2024b; CEPAL, 2025a). La persistencia de esta trampa se asocia a factores estructurales interrelacionados —como la heterogeneidad productiva, la segmentación laboral, la limitada capacidad redistributiva de la política fiscal, las debilidades de los sistemas de protección social, las brechas educativas, las desigualdades de género, la segregación territorial y la discriminación—, lo que refuerza la necesidad de avanzar hacia una comprensión y una medición multidimensional de la desigualdad.

Desde esta perspectiva, la desigualdad en la región no puede comprenderse adecuadamente a partir de indicadores aislados, ni reducirse a una única dimensión como el ingreso. Por el contrario, se trata de un fenómeno que se expresa de manera simultánea en distintas esferas del bienestar y cuya intensidad depende, en gran medida, de la forma en que estas dimensiones se articulan entre sí. En particular, la superposición de desventajas en ámbitos como la educación, la salud, la vivienda y el empleo configura trayectorias de exclusión persistentes, que limitan las oportunidades a lo largo del ciclo de vida y refuerzan los mecanismos de reproducción de la desigualdad.

En este marco, medir la desigualdad exclusivamente a partir de indicadores de ingreso ofrece una visión parcial del problema. Si bien el ingreso es una dimensión relevante del bienestar, no logra capturar otras privaciones fundamentales ni la forma en que estas se combinan en la experiencia de las personas. Dimensiones como salud, educación, vivienda o calidad del empleo permanecen invisibilizadas en un enfoque unidimensional, al igual que los procesos de acumulación de desventajas que afectan de manera

simultánea a determinados grupos. Avanzar hacia una medición multidimensional permite, por tanto, comprender de manera más integral la estructura de la desigualdad y generar insumos más adecuados para el diseño de políticas públicas orientadas a su reducción.

Con el tiempo, se han incorporado nuevas métricas, como la distribución de la riqueza, que suele revelar brechas aún más profundas que las del ingreso corriente (Carranza et al., 2025). No obstante, existe un consenso creciente en torno a que la desigualdad es, por naturaleza, multidimensional, y que no puede ser captada adecuadamente mediante un único indicador (CEPAL, 2024a; CEPAL, 2025). La CEPAL ha subrayado que la heterogeneidad estructural de las economías latinoamericanas se refleja en un mercado laboral segmentado, lo que permite que las desigualdades económicas se entrelacen con brechas sociales, políticas y culturales en múltiples ámbitos (CEPAL, 2016b).

En efecto, las desigualdades derivadas de la posición ocupacional se ven amplificadas por otros factores vinculados a dimensiones como educación, salud, vivienda, acceso a servicios básicos, protección social, tecnologías de la información e incluso la calidad medioambiental (CEPAL, 2014). La persistencia de estas brechas responde, en gran medida, a mecanismos de discriminación estructural asociados a factores como el género, la condición étnico-racial, la condición socioeconómica y el territorio, entre otros, que perpetúan las ventajas de ciertos grupos sobre otros. Por ello, abordar la desigualdad en América Latina y el Caribe exige un enfoque multidimensional, que considere no sólo las brechas monetarias, sino también las múltiples esferas de derechos que inciden en el bienestar de las personas (CEPAL, 2016a).

En esta línea, la CEPAL propone una concepción amplia de la desigualdad, que va más allá de lo estrictamente económico. Esta noción incluye la igualdad de derechos, el desarrollo equitativo de capacidades y el reconocimiento y la autonomía de los distintos actores sociales —considerando dimensiones como el género, la condición étnico-racial, la edad y el territorio— (Bárcena et al., 2016). Desde esta perspectiva normativa, resulta fundamental visibilizar y medir las brechas en todas estas dimensiones —y no sólo en el ingreso— para orientar adecuadamente la acción pública hacia la reducción de la desigualdad.

En efecto, medir la desigualdad únicamente a partir de indicadores promedio de ingreso o consumo ofrece una visión parcial del problema. Estos indicadores no capturan el bienestar integral de las personas, dejando fuera dimensiones clave como la salud, la educación, la vivienda o la calidad del empleo. En este sentido, avanzar hacia una medición multidimensional permite evaluar de manera más precisa las brechas de bienestar, al identificar ámbitos de rezago que suelen quedar invisibilizados en un enfoque unidimensional¹. Además, este enfoque facilita el diseño de políticas públicas integrales, orientadas a reducir la desigualdad de forma simultánea en múltiples dimensiones (CEPAL, 2025).

En esta dirección, diversos organismos internacionales han promovido marcos de medición más amplios que capturan desigualdades en múltiples dimensiones. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), por ejemplo, propone un marco de bienestar con once dimensiones clave —salud, educación, empleo y participación cívica, entre otros— que permite monitorear tanto promedios como brechas distributivas (OCDE, 2020). En Europa, destacan herramientas como el tablero de desigualdades del Joint Research Centre (Alberti et al., 2021) y el Multidimensional Inequality Framework desarrollado por la London School of Economics (LSE) y Oxfam (McKnight et al., 2018). Estas iniciativas reflejan un consenso creciente: la desigualdad es un fenómeno complejo y multidimensional que requiere marcos analíticos integrales para su adecuada medición y seguimiento, complementando así los enfoques tradicionales.

La literatura especializada ha desarrollado diversas metodologías para medir la desigualdad más allá del ingreso desde hace ya varias décadas. Desde los trabajos pioneros de economistas como Fisher (1956), Kolm (1977), Atkinson y Bourguignon (1982), hasta propuestas más recientes (Foster y

¹ En este documento, se entiende por bienestar el conjunto de condiciones que permiten a las personas desarrollar sus capacidades, ejercer sus derechos y alcanzar una vida digna en múltiples dimensiones —materiales, sociales y de participación—, más allá del ingreso monetario. Esta noción general, enraizada en el enfoque de capacidades de Sen (1999) y en el marco de desarrollo de la CEPAL, sirve como concepto orientador del análisis que sigue.

Lokshin (2024) y Dhongde et al., (2024)), se han planteado indicadores compuestos y análisis distributivos que consideran múltiples atributos (por ejemplo, educación, salud o empleo). Sin embargo, muchas de estas herramientas aún no se han incorporado de forma sistemática en la formulación de políticas públicas, en parte debido a los desafíos técnicos y de disponibilidad de datos que implican.

La CEPAL (2024b) advierte que la limitada disponibilidad de información estandarizada dificulta la medición comparativa de la desigualdad multidimensional en la región, lo que refuerza la necesidad de avanzar hacia consensos metodológicos y de fortalecer las capacidades estadísticas de los países. A pesar de estos obstáculos, contar con métricas multidimensionales de desigualdad resulta indispensable para alinear la evidencia con la naturaleza compleja del problema. Ello permitiría reconocer y monitorear de forma más precisa las privaciones simultáneas que afectan a determinados grupos poblacionales, fortaleciendo así el diseño de políticas integrales orientadas a reducir la desigualdad y promover un desarrollo verdaderamente inclusivo (Salazar-Xirinachs, 2023).

En suma, existe una necesidad urgente de avanzar hacia mediciones de la desigualdad social que trasciendan el ingreso, en coherencia con los marcos analíticos y normativos impulsados por la CEPAL, y con la visión de la Agenda 2030 de “no dejar a nadie atrás” en el camino hacia el desarrollo sostenible.

A continuación, se desarrollan tres elementos que fundamentan esta necesidad: primero, una revisión de los marcos conceptuales e institucionales que justifican la medición multidimensional; segundo, un examen de las desigualdades persistentes en dimensiones clave del bienestar; y tercero, el fenómeno de la acumulación de desventajas como mecanismo central de la desigualdad social.

A. La desigualdad más allá de los ingresos

Durante décadas, el debate sobre la desigualdad en América Latina y el Caribe se enfocó principalmente en las disparidades de ingreso (monetario), debido a su impacto directo sobre el bienestar y las oportunidades de las personas (CEPAL, 2014). Sin embargo, existe un reconocimiento creciente de que este enfoque ha tendido a dejar en segundo plano otras brechas profundas que también son determinantes clave de la calidad de vida.

Incluso en contextos de crecimiento económico con reducción de la pobreza, la persistencia de desigualdades estructurales en estas dimensiones no monetarias ha obstaculizado el avance hacia un desarrollo verdaderamente inclusivo (Bárcena y Prado, 2016). En efecto, la desigualdad constituye un fenómeno inherentemente multidimensional, entrelazado con factores socioeconómicos, demográficos y culturales que trascienden la mera distribución del ingreso (CEPAL, 2016a y 2024a). En América Latina y el Caribe —con altos niveles de desigualdad—, limitar la medición únicamente a los ingresos impide captar la complejidad del problema y comprender sus raíces estructurales.

Desde el plano conceptual, diversos marcos teóricos respaldan la necesidad de abordar la desigualdad desde una perspectiva multidimensional. Uno de los más influyentes es el enfoque de capacidades propuesto por Amartya Sen, el que plantea que el desarrollo debe evaluarse en función de las capacidades y funcionamientos que las personas efectivamente logran —como estar sanas, recibir educación o participar en la vida comunitaria— y no únicamente en términos de los recursos monetarios que poseen (Deneulin y Shanani, 2009). En este enfoque, los ingresos se entienden como un medio para alcanzar fines, cuya utilidad depende de la capacidad de cada individuo para transformar recursos en bienestar real (Sen, 1999).

Medir el bienestar únicamente por ingreso o gasto puede invisibilizar fenómenos como las privaciones ocultas —por ejemplo, personas objetivamente en situación de pobreza que reportan alta satisfacción subjetiva por haberse adaptado a sus carencias—. En cambio, evaluar el desarrollo en términos de capacidades implica necesariamente considerar múltiples dimensiones, pues abarca todas las “cosas que una persona puede valorar ser o hacer” (Sen, 1999, p. 75). En otras palabras, no

se trata sólo de cuánto dinero tiene una persona, sino de qué puede hacer con ese dinero y con otros recursos —como educación, salud, tiempo libre o participación política—. Este giro conceptual, que desplaza el foco del tener al poder hacer, refuerza la idea de que la desigualdad debe medirse a partir de múltiples ejes del logro humano.

En la misma línea, el enfoque de desarrollo humano impulsado por el PNUD, reflejado en indicadores como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), ha destacado tres dimensiones fundamentales del bienestar: una vida larga y saludable, acceso a la educación, y un nivel de vida digno (PNUD, 2019). Estas dimensiones corresponden a capacidades básicas que son valoradas universalmente, y han servido de base para indicadores compuestos más recientes, como el IDH ajustado por desigualdad, que incorpora la distribución desigual de logros en salud, educación e ingresos. A su vez, diversos organismos internacionales y especialistas han propuesto listas ampliadas de dimensiones del bienestar. El informe de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009), por ejemplo, identificó al menos ocho dimensiones clave para evaluar la desigualdad y el progreso social: condiciones materiales de vida, educación, salud, calidad del empleo y uso del tiempo, participación ciudadana y calidad de la gobernanza, integración social, seguridad física y calidad del entorno.

De forma complementaria, la OCDE ha desarrollado un marco de bienestar compuesto por once dimensiones —entre ellas, ingresos y riqueza, empleo, vivienda, salud, conocimientos y habilidades, medio ambiente, seguridad, equilibrio vida-trabajo, vínculos sociales, participación cívica y bienestar subjetivo— con el fin de monitorear tanto los promedios como las brechas distributivas en cada una (OECD, 2020). En el contexto europeo, estas ideas se han traducido en sistemas de monitoreo multidimensional. Un ejemplo es el tablero de desigualdades desarrollado por el Joint Research Centre (EU MIMF), que permite visualizar para cada país las brechas en una amplia gama de indicadores de bienestar, desde resultados económicos hasta salud auto-reportada, educación, vivienda o medio ambiente (Alberti et al., 2021). En esta misma línea, el Multidimensional Inequality Framework (MIF), elaborado por LSE junto a Oxfam, propone una metodología que identifica siete dominios centrales del bienestar —entre otros, salud, educación, seguridad, participación y condiciones de vida (McKnight et al., 2018). En conjunto, estas iniciativas reflejan un consenso creciente: la desigualdad es un fenómeno con múltiples dimensiones y, por tanto, requiere marcos analíticos integrales para su medición y seguimiento.

Los tres marcos comparten el objetivo de superar la medición unidimensional de la desigualdad, pero difieren en sus fundamentos conceptuales y operativos. El enfoque de LSE/Oxfam se basa explícitamente en la teoría de las capacidades de Amartya Sen (1999), al evaluar las desigualdades según las oportunidades reales de las personas para vivir la vida que valoran. El marco de la OCDE, por su parte, se inspira en la noción de bienestar multidimensional propuesta por la comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009), y se operacionaliza a través de un tablero de indicadores que refleja las brechas distributivas en diversas esferas de la vida. Finalmente, el marco de la Comisión Europea (EU MIMF) adopta un enfoque híbrido y más amplio: combina la medición de desigualdades de resultado con la de desigualdades de oportunidad (por ejemplo, cómo influye el origen socioeconómico en la educación) y considera obstáculos a la movilidad social en Europa, subrayando la necesidad de articular distintas perspectivas metodológicas bajo un lenguaje común para la formulación de políticas en la región.

La CEPAL ha realizado una contribución conceptual clave a la comprensión de la desigualdad en la región a través de su propuesta de la matriz de la desigualdad social (CEPAL 2016a). Este marco analítico distingue, por un lado, una serie de esferas del bienestar —como el ingreso, la educación, la salud, el empleo, la vivienda y la protección social—, y por otro, una serie de ejes de estratificación social, tales como el género, la pertenencia étnico-racial, el territorio (urbano o rural), el ciclo de vida (edad) y el nivel socioeconómico de origen. La interacción entre estas dimensiones y ejes conforma una matriz de desigualdad social en la que las brechas en distintas áreas del bienestar —por ejemplo, en educación o salud— se expresan de manera diferenciada según el grupo poblacional: mujeres u hombres, pueblos indígenas o no indígenas, zonas rurales o urbanas, infancia, juventud o vejez.

Esta perspectiva evidencia que la desigualdad es un fenómeno sistémico, producto de la intersección entre resultados desiguales y factores estructurales de diferenciación social que tienden a perpetuar dichas brechas. Como afirman Bárcena y Prado (2016, p. 51), las “otras dimensiones de desigualdad, al mismo tiempo que refuerzan las desigualdades socioeconómicas, son influidas por ellas”. En este sentido, la CEPAL destaca que abordar la desigualdad en América Latina y el Caribe requiere adoptar un enfoque multidimensional, que no se limite a la disparidad de ingresos, sino que considere también las múltiples esferas de derechos que inciden en el bienestar de las personas.

Para efectos de este documento conviene diferenciar con claridad dos niveles de análisis. La matriz de desigualdad social de la CEPAL identifica esferas del bienestar y ejes estructurales de estratificación; la propuesta de medición de la desigualdad multidimensional que se propondrá, en cambio, busca medir la distribución conjunta de logros en varias de esas esferas. En consecuencia, el índice no sustituye a la matriz ni pretende agotar su riqueza interpretativa. Su función es más acotada y, al mismo tiempo, estratégica: ofrecer una medida sintética de desigualdad multidimensional cuya lectura pueda ser enriquecida por la matriz al momento de analizar acumulaciones de desventajas y brechas entre grupos.

Los distintos enfoques revisados al analizar la desigualdad coinciden ampliamente en incluir dimensiones como la educación, la salud, el trabajo —tanto en términos de calidad del empleo como de ingresos laborales— y las condiciones materiales de vida, incluyendo vivienda, servicios básicos e infraestructura. Cada marco, sin embargo, introduce matices según sus objetivos específicos: la CEPAL, por ejemplo, incorpora explícitamente la participación ciudadana y la protección social como dimensiones vinculadas al ejercicio de la ciudadanía; la OCDE, la Unión Europea, LSE y Oxfam suman factores como el medio ambiente, la seguridad y el bienestar subjetivo; mientras que el enfoque de capacidades pone el énfasis en la libertad efectiva de las personas para alcanzar estados valiosos en cada dimensión.

A pesar de sus diferencias, todas estas propuestas comparten una premisa común: el bienestar es inherentemente multidimensional. La comprensión cabal de esta naturaleza multidimensional resulta clave para el análisis y la disminución de la desigualdad. Un enfoque integral permite visibilizar cómo las carencias en distintos ámbitos suelen converger en los mismos hogares y personas, y con ello hacer frente a las trampas de la alta desigualdad en la región (CEPAL, 2024). A continuación, se examinan cuatro dimensiones fundamentales —educación, salud, vivienda y calidad del empleo— destacando las brechas persistentes en cada una, para luego analizar el fenómeno de la acumulación de desventajas que vincula a todas ellas. Este recorrido evidenciará que las privaciones no ocurren de forma aislada, sino que tienden a acumularse en ciertos sectores poblacionales a lo largo del curso de vida, con implicaciones de largo plazo para el desarrollo humano y social de la región. Comprender estas dinámicas multidimensionales y acumulativas sentará las bases para propuestas de medición más completas y políticas públicas transformadoras orientadas a reducir la desigualdad.

B. Desigualdades sociales en dimensiones clave del bienestar

1. Educación: desigualdades que se acumulan desde la primera infancia

A pesar de los avances en cobertura educativa, persisten profundas desigualdades asociadas a la posición socioeconómica, el origen étnico y el territorio (Trucco, 2014). Las personas jóvenes de hogares de estratos altos no sólo acceden con mayor facilidad al sistema educativo, sino que también permanecen más tiempo en él que sus pares de menores ingresos. Por ejemplo, entre los jóvenes de 20 a 24 años, la tasa de asistencia educativa en el quintil urbano más rico (52,7%) casi duplica la del quintil urbano más pobre (27,1%) (CEPAL, 2025). Estas disparidades no solo se reflejan en los años de escolaridad o en la finalización de niveles educativos, sino también en la calidad de los aprendizajes.

Estudios recientes evidencian brechas significativas en el rendimiento académico según el origen social: en evaluaciones estandarizadas internacionales, estudiantes de nivel socioeconómico bajo quedan cada vez más rezagados respecto de sus pares de nivel alto a medida que avanzan en la escolaridad básica (Näslund-Hadley y Alonzo 2024). Entre tercero y sexto grado de primaria, la brecha en matemáticas entre alumnos pobres y ricos se amplía significativamente —con casos notorios en Brasil y Uruguay—, y se observan patrones similares en lenguaje y ciencias en países como Colombia, Guatemala, Panamá, Perú y Uruguay. Asimismo, los estudiantes indígenas enfrentan desventajas adicionales en su trayectoria educativa, mostrando menores logros que los no indígenas, una brecha atribuible no sólo a factores socioeconómicos, sino también a formas de discriminación estructural (Näslund-Hadley y Alonzo 2024).

La crisis educativa derivada de la pandemia de COVID-19 profundizó aún más estas desigualdades (Hupe et al., 2022). Niñas, niños y adolescentes de hogares pobres sufrieron mayores pérdidas de aprendizaje debido a limitaciones como la falta de conectividad, espacios adecuados para estudiar y apoyo educativo en el hogar (CEPAL, 2022). En suma, el acceso equitativo a una educación de calidad sigue siendo un desafío pendiente: los sectores más pobres, rurales, y personas indígenas y afrodescendientes continúan registrando menores tasas de conclusión en la secundaria y baja participación en la educación superior, lo que contribuye a perpetuar su desventaja frente a los grupos más privilegiados.

2. Salud: brechas sanitarias persistentes en una región en transición

Las brechas de bienestar en América Latina y el Caribe también se manifiestan con fuerza en el ámbito de la salud. Aunque la región ha logrado avances notables en indicadores promedio —como el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la mortalidad infantil—, persisten desigualdades sanitarias significativas entre distintos grupos socioeconómicos y geográficos (Marinho et al., 2023). El estado de salud y el acceso a servicios sanitarios oportunos y de calidad están condicionados por los determinantes sociales de la salud, es decir, factores como el nivel de ingreso, la educación de los padres, el origen étnico y el lugar de residencia (OMS y CSDH, 2008; WHO y UNICEF, 2023).

Un estudio reciente de Bancalari et al., (2025) muestra que la mortalidad infantil es entre tres y cinco veces más alta en los segmentos más pobres y con menor nivel educativo, en comparación con los sectores más ricos y educados, en países como el Estado Plurinacional de Bolivia, Guatemala, Haití, el Perú, Colombia o el Paraguay. De forma similar, la desnutrición crónica infantil —manifestada como retraso en el crecimiento— afecta, en promedio, al 13% de las y los niños latinoamericanos, pero su prevalencia se duplica en hogares donde los padres tienen baja escolaridad, en comparación con aquellos donde los padres han completado la educación secundaria o superior. Esta brecha es aún más pronunciada cuando se comparan los hogares más pobres con los más acomodados.

Estas diferencias evidencian que, pese a los avances globales en salud pública, los beneficios no se han distribuidos de manera equitativa, observándose una gradiente social que muestra que la salud mejora progresivamente a medida que aumenta el nivel socioeconómico de las personas (Marmot, 2015). La carga de enfermedad en la región ha transitado progresivamente hacia las enfermedades no transmisibles —como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y los trastornos de salud mental—, típicas de sociedades en transición demográfica y epidemiológica (Hambleton, et al., 2023). Sin embargo, este cambio conlleva desafíos particulares en contextos marcados por la desigualdad: los sectores de menores ingresos enfrentan mayores factores de riesgo, como una alimentación inadecuada o condiciones de vida poco saludables, y cuentan con mayores obstáculos para acceder a atención médica continua (Roberti et al., 2023), producto de la acción de los determinantes sociales de la salud.

Por ejemplo, la prevalencia de obesidad y enfermedades asociadas es más alta en los sectores urbanos pobres, donde predominan los alimentos ultra procesados de bajo costo (Jiwani et al., 2019, Matos et al., 2021). En contraste, en comunidades rurales indígenas aún persisten enfermedades infecciosas y deficiencias nutricionales que han sido erradicadas en poblaciones más favorecidas (Colussi et al., 2022, Rivadeneira et al., 2022). Asimismo, los indicadores de salud materna y reproductiva presentan importantes brechas étnicas y territoriales. Las mujeres indígenas, rurales o que habitan

periferias urbanas enfrentan un riesgo significativamente mayor de morir por causas relacionadas con el embarazo y el parto, reflejando profundas desigualdades en la cobertura y calidad de la atención obstétrica (GTR, 2017).

3. Vivienda y su entorno: habitar la desigualdad

Las condiciones de vivienda y entorno son un reflejo evidente de la desigualdad social en la región. Los hogares de menores ingresos suelen habitar viviendas de menor calidad, con mayor hacinamiento y acceso limitado a infraestructuras básicas, en comparación con los sectores de mayores ingresos. Según datos recientes, el hacinamiento —definido como más de tres personas por habitación— afecta al 49,2% de las personas en hogares rurales pertenecientes al quintil más pobre, mientras que esta proporción se reduce al 17,3% en el quintil rural más rico (CEPAL, 2025). En otras palabras, vivir en situación de pobreza incrementa significativamente la probabilidad de residir en viviendas congestionadas o precarias.

Del mismo modo, las deficiencias en servicios esenciales —como agua potable, saneamiento y electricidad— se concentran en las comunidades más vulnerables. En 2022, se estimaba que 66 millones de personas en la región carecían de saneamiento adecuado y que 33 millones no contaban con acceso a fuentes de agua mejorada en sus viviendas. Si bien estas cifras han mejorado levemente en algunos países, persisten marcadas brechas urbano-rurales (WHO y UNICEF 2023). Estas carencias habitacionales no sólo expresan la pobreza, sino que también la profundizan. Vivir en condiciones de hacinamiento e insalubridad perjudica la salud —favoreciendo la propagación de enfermedades infecciosas, por ejemplo— y limita el rendimiento escolar y laboral. En América Latina, más de la mitad (52%) de las niñas, niños, y adolescentes que crecen en pobreza enfrentan privaciones severas en materia de vivienda, incluyendo hacinamiento (que afecta al 55% de estos casos) y la ausencia de servicios básicos en el hogar (CEPAL, 2022).

La urbanización en la región ha estado acompañada por la expansión de barrios marginales y asentamientos periféricos segregados (Sabatini, 2006). Las ciudades de la región son altamente desiguales: en ellas conviven sectores con infraestructura moderna y alta calidad de vida con cinturones de miseria y asentamientos informales sin regularización (Ruiz-Rivera y Lindert, 2016). Esta fragmentación urbano-territorial agudiza la desigualdad, ya que limita el acceso de quienes viven en barrios precarios a oportunidades de empleo formal, educación de calidad, servicios de salud cercanos y medios de transporte adecuados (Brain y Prieto, 2021). En síntesis, la desigualdad urbana se traduce en obstáculos concretos para la inclusión social. Un hogar ubicado en una villa miseria o favela suele enfrentar mayores niveles de inseguridad, exposición a la violencia, menor presencia del Estado y estigmatización social, en comparación con un hogar pobre ubicado en un entorno más integrado (Virgilio, 2021).

4. Empleo: trabajo precario y protección desigual frente al desafío de la inclusión laboral

El empleo y las condiciones laborales representan una dimensión central de la desigualdad multidimensional. El trabajo no sólo constituye la principal fuente de ingresos para la mayoría de los hogares, sino que también puede ser un motor de inclusión social o, por el contrario, un factor que perpetúe vulnerabilidades, dependiendo de su calidad. En este contexto, la región enfrenta el desafío de no solo generar más empleos, sino de promover empleos de calidad e inclusivos. Tener un trabajo remunerado no garantiza, por sí solo, salir de la pobreza ni alcanzar el bienestar (CEPAL, 2023). De hecho, la región arrastra una histórica prevalencia de empleo informal, precario y con escasa protección social, que afecta de forma desproporcionada a jóvenes, mujeres, trabajadores rurales, personas con discapacidad, y personas pertenecientes a Pueblos Indígenas o personas afrodescendientes.

Los datos más recientes reflejan la magnitud de esta brecha en la calidad del empleo y la protección social. De los 292 millones de personas ocupadas en América Latina y el Caribe, la mitad trabaja en condiciones de informalidad, sin contrato laboral ni acceso a la seguridad social (CEPAL, 2023). Esta situación se traduce en bajos ingresos, desprotección frente a despidos, falta de acceso a sistemas de

pensiones y seguros de salud, y condiciones laborales vulnerables. No sorprende entonces que cerca del 20% de las personas ocupadas viva por debajo de la línea de pobreza, es decir, son trabajadores en situación de pobreza cuyos ingresos no cubren las necesidades básicas de sus hogares (CEPAL, 2023). Además, alrededor del 40% de los trabajadores gana menos que el salario mínimo legal en su país, lo que refleja la persistente precariedad salarial, y cerca del 50% no cotiza para una pensión (CEPAL, 2023). Estos indicadores muestran que el problema no se limita al desempleo, sino que incluye la baja calidad de muchos de los empleos disponibles, lo cual perpetúa la vulnerabilidad económica. Por ello, avanzar hacia la inclusión laboral —como estrategia integral que combina la generación de empleo con mejoras en su calidad, acceso a protección social y garantía de derechos laborales— es fundamental para reducir la desigualdad en la región (CEPAL, 2025).

Las desigualdades de género y edad agravan aún más este panorama. Las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder a empleos formales y de calidad, y registran importantes brechas respecto a los hombres en términos de ingresos y estabilidad laboral. Según el Índice de Mejores Trabajos del BID, la calidad del empleo femenino es, en promedio, 16 puntos inferior a la del masculino en la región (IDB, 2024), lo que refleja su mayor presencia en ocupaciones precarias y mal remuneradas. La situación de los jóvenes también es crítica. En 2023, la tasa de desempleo entre personas de 15 a 24 años fue tres veces superior a la de los mayores de 25. Y aun cuando logran emplearse, el 60% lo hace en condiciones informales, sin acceso a derechos laborales ni protección social (OIT, 2025). Esta combinación de alta informalidad y desempleo afecta especialmente a jóvenes de bajos ingresos, mujeres jóvenes —que a menudo asumen trabajos de cuidado no remunerados o enfrentan barreras para ingresar al empleo formal—, así como a pueblos indígenas y personas afrodescendientes (Espejo, 2022).

C. La acumulación de desventajas como mecanismo de la desigualdad social

La acumulación de desventajas constituye un mecanismo clave para comprender la persistencia de la desigualdad estructural en América Latina y el Caribe. Las dimensiones del bienestar —educación, salud, vivienda y empleo— no operan de forma independiente, sino que tienden a entrelazarse y reforzarse mutuamente, generando brechas crecientes entre grupos sociales (Saraví, 2020). Desde una perspectiva teórica, la noción de “desventaja acumulada” desarrollada por Wolff y de-Shalit (2007) plantea que las privaciones en distintas esferas se potencian entre sí, agravando la situación de quienes enfrentan múltiples carencias simultáneas. Este enfoque subraya la necesidad de orientar las políticas públicas hacia los grupos “en peor situación”, considerando fenómenos como las “desventajas corrosivas” y los “funcionamientos fértiles”, que permiten identificar puntos estratégicos de intervención.

Desde el enfoque de ciclo de vida, las desigualdades se configuran y amplifican a lo largo del tiempo. Las condiciones iniciales —como el acceso a nutrición, educación temprana o capital cultural— influyen decisivamente en las trayectorias futuras (Elder, 1998; Dannefer, 2003). Las ventajas iniciales tienden a generar acumulación positiva, mientras que las desventajas tempranas se traducen en obstáculos persistentes que limitan el acceso a educación, empleo formal y protección social, reproduciendo la desigualdad entre generaciones. Este proceso puede observarse con claridad en contextos latinoamericanos, donde múltiples carencias simultáneas desde la infancia afectan las oportunidades a lo largo de la vida y perpetúan círculos intergeneracionales de pobreza.

La perspectiva de interseccionalidad complementa este análisis al mostrar que las desigualdades se estructuran a partir de la interacción de múltiples ejes —género, etnicidad, clase, territorio— que generan experiencias diferenciadas de exclusión (Crenshaw, 1989). En la región, la matriz de desigualdad social evidencia que estos ejes operan de manera articulada, concentrando desventajas en determinados grupos poblacionales (CEPAL, 2016a). Asimismo, la noción de vulnerabilidad acumulada destaca que las personas con desventajas previas enfrentan impactos más severos ante choques adversos, como crisis

económicas o sanitarias (Adger, 2006). La pandemia de COVID-19 ilustró este fenómeno: trabajadores informales y hogares en condiciones precarias experimentaron mayores pérdidas de ingresos y peores resultados sanitarios (CEPAL, 2023; Santos y Fynn, 2024).

En términos de capital humano y social, la acumulación de ventajas y desventajas también es evidente. La formación de habilidades presenta rendimientos dinámicos, donde las inversiones tempranas facilitan aprendizajes posteriores (Heckman, 2006). Por el contrario, déficits iniciales son difíciles de revertir, consolidando brechas educativas y laborales. De igual forma, el acceso desigual a redes sociales y capital relacional amplía las oportunidades de los grupos privilegiados, en tanto limita las de los sectores más vulnerables (Lin, 1999).

La evidencia empírica confirma estas dinámicas. En la región, el origen socioeconómico sigue siendo un determinante clave de las trayectorias individuales, reflejando bajos niveles de movilidad social (Saraví, 2020; Torche, 2014). Estudios recientes muestran que entre un 30% y un 50% de la desigualdad de ingresos se explica por circunstancias de origen, lo que evidencia el carácter estructural de estas brechas (Brunori et al., 2025).

En suma, la acumulación de desventajas opera a nivel individual, intergeneracional y estructural, y explica por qué ciertos grupos permanecen rezagados incluso en contextos de crecimiento económico. Este enfoque implica que las políticas públicas deben ser integrales y multidimensionales, ya que intervenciones aisladas resultan insuficientes. Asimismo, plantea exigencias metodológicas relevantes: si la desigualdad es acumulativa e interdependiente, su medición debe capturar la distribución conjunta de logros y privaciones, identificando la concentración de desventajas en los mismos grupos poblacionales.

II. Debates sobre la medición de la desigualdad multidimensional

La medición de la desigualdad se ha centrado tradicionalmente en una única dimensión, como el ingreso. Sin embargo, la investigación contemporánea reconoce cada vez más que el bienestar es un fenómeno multidimensional (por ejemplo, Weymark, 2006; Lugo, 2007). En disciplinas como la economía y los estudios del desarrollo, se distingue crecientemente entre medidas unidimensionales —que capturan la desigualdad en un solo atributo— y enfoques multidimensionales que consideran diversas dimensiones del bienestar, como la salud, la educación o la riqueza (Seth y Santos, 2021; Calia y Ferrante, 2024). Este cambio refleja una comprensión más amplia de que los aspectos no monetarios influyen de manera significativa en la calidad de vida (Stiglitz et al., 2009).

En este contexto, la medición de la desigualdad multidimensional se ha desarrollado a partir de múltiples aproximaciones, cada una con sus propias virtudes y limitaciones. Para América Latina y el Caribe —una región caracterizada por desigualdades persistentes, heterogéneas y superpuestas— resulta fundamental seleccionar, o diseñar, una estrategia de medición que combine rigor normativo con viabilidad empírica. Los marcos revisados ofrecen un repertorio amplio de opciones, y una estrategia adecuada probablemente requiera articular distintos enfoques para capturar la complejidad del fenómeno. Esto es especialmente relevante si se busca avanzar en el principio de “no dejar a nadie atrás”, dotando a la región de herramientas analíticas sólidas para orientar políticas hacia mayores niveles de equidad social multidimensional.

A. Tableros de indicadores vs. índices compuestos

Uno de los debates más relevantes en la medición del bienestar es si se deben presentar múltiples indicadores de manera separada, a través de un enfoque de “tablero” (o *dashboard*, por su denominación en inglés), o sintetizarlos en un único índice compuesto. Aunque ambos enfoques tienen sus méritos, la elección entre uno y otro depende en gran medida de las prioridades analíticas y políticas de los usuarios de estos indicadores. En el enfoque tipo tablero, cada dimensión del bienestar se mide de manera independiente, utilizando su propio indicador o índice parcial, sin combinar estos datos en una cifra única. Por ejemplo, se podrían reportar las desigualdades en ingresos, empleo, salud y educación de manera separada, sin

integrarlas en un indicador global. Este enfoque subraya la autonomía de cada dimensión, reconociendo que cada aspecto del bienestar tiene su propio valor, y evita las controversias asociadas a cómo ponderar o combinar dimensiones heterogéneas (Erikson, 1989). Los defensores del enfoque del tablero argumentan que mostrar indicadores específicos mantiene la transparencia y el detalle, evitando los problemas que surgen al agregar datos en un solo índice compuesto. De hecho, figuras como Ravallion defienden la idea de derivar la mejor medida posible para cada dimensión por separado, en lugar de combinar todas las dimensiones en un solo índice (Ravallion, 2012a).

Martin Ravallion ha sido un crítico destacado de los índices compuestos de desarrollo. En su trabajo *On Multidimensional Indices of Poverty* (Ravallion, 2011), cuestiona la utilidad de combinar múltiples privaciones en un índice compuesto, sugiriendo que, desde una perspectiva política, bastaría con un tablero de indicadores específicos. Argumenta que un índice compuesto puede ocultar qué dimensiones están impulsando los cambios, lo que es crucial para que los responsables políticos comprendan la situación (por ejemplo, ¿está empeorando la desigualdad en salud o en educación?). Además, Ravallion señala que los índices compuestos incorporan compensaciones implícitas entre dimensiones, lo que puede llevar a interpretaciones erróneas. Por ejemplo, las ponderaciones implícitas en un índice compuesto podrían permitir que un deterioro grave en una dimensión se compense con una mejora modesta en otra. Ravallion (2012b) mostró esto con el Índice de Desarrollo Humano (IDH), señalando que un país podría ver mejorar su índice general a pesar de una caída significativa en la esperanza de vida, siempre que los ingresos aumentaran lo suficiente. Según Ravallion, estos resultados desafían el sentido común y destacan el riesgo de confiar en un solo número.

No obstante, el enfoque basado en tableros presenta limitaciones significativas. En primer lugar, resulta complicado obtener una visión clara de la desigualdad general cuando se dispone de una gran cantidad de información. Cuando el conjunto de indicadores es extenso, puede ser difícil para los tomadores de decisiones identificar en qué dimensiones la desigualdad es más severa o cómo evoluciona en su conjunto. Los tableros con numerosos indicadores pueden volverse eclécticos y difíciles de interpretar, complicando la priorización de políticas. Por ejemplo, si un país mejora en salud, pero empeora en educación, el tablero no ofrece una respuesta clara sobre si la desigualdad total mejoró o no, lo que dificulta a los tomadores de decisiones asignar recursos limitados entre dimensiones en competencia. Además, al evaluar cada dimensión de forma aislada, se ignoran las interacciones entre ellas. Si las mismas personas están rezagadas en varias áreas (por ejemplo, salud, educación y empleo), analizar las desigualdades por separado no refleja completamente cómo estas desventajas se acumulan. Como señalan Aaberge y Brandolini (2015, p. 146), “la sensibilidad a las asociaciones entre dimensiones es lo que distingue al análisis multidimensional del unidimensional”. Por tanto, un enfoque puramente basado en tableros podría pasar por alto un aspecto fundamental del análisis multidimensional: identificar cómo las desigualdades en distintas esferas se refuerzan mutuamente en ciertos grupos.

En contraste, los índices compuestos buscan sintetizar la desigualdad global en una única medida, considerando simultáneamente todas las dimensiones del bienestar. Este enfoque parte de la premisa de que es posible y deseable formar un juicio social unificado sobre la distribución multidimensional del bienestar. Existen razones prácticas para esta aproximación: en muchos casos, es necesario condensar información variada para facilitar el monitoreo de tendencias o realizar comparaciones entre países de manera clara. Además, un índice compuesto permite una comunicación más accesible para públicos no técnicos y ofrece una herramienta más directa para la toma de decisiones, al proporcionar una señal resumida de la desigualdad social. Un índice compuesto, como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) ajustado por desigualdad, sintetiza diversas dimensiones en una sola métrica, lo que facilita su interpretación y comparación entre diferentes poblaciones o a lo largo del tiempo. En este sentido, el movimiento “Más allá del PIB” en la economía del desarrollo ha impulsado esfuerzos por capturar el bienestar multidimensional a través de medidas compuestas (Fleurbaey, 2009).

Quizás el argumento más importante a favor de los índices compuestos es su capacidad para capturar la distribución conjunta de las desigualdades. Un buen índice multidimensional debe ser sensible a las interrelaciones entre dimensiones, ya que las desigualdades en una dimensión pueden reforzarse

mutuamente (Stiglitz et al., 2009, p. 205). Incorporar la información sobre cómo se distribuyen las carencias y logros simultáneamente en distintas áreas es esencial para comprender adecuadamente la desigualdad. Las desigualdades deberían considerarse más graves cuando se “yuxtaponen”, es decir, cuando aquellos en peor situación en una dimensión también lo están en las demás, y de manera similar para aquellos en posiciones más favorecidas (Decancq y Lugo 2012). Como bien menciona Decancq y Lugo (2012, p. 721), “ignorar estas interrelaciones equivale a abandonar una de las motivaciones claves del enfoque multidimensional de la desigualdad”.

Sin embargo, la construcción de un índice compuesto implica tomar decisiones metodológicas y normativas delicadas, como la ponderación de cada dimensión, la elección de la forma funcional para agregarlas y cómo tratar las compensaciones entre logros en diferentes aspectos del bienestar. Estas decisiones tienen un impacto significativo en el resultado final, por lo que deben ser fundamentadas de manera clara y transparente. A continuación, se revisan los principales enfoques para la construcción de índices multidimensionales compuestos, destacando sus fundamentos teóricos, propiedades y los supuestos que subyacen a cada uno de ellos.

B. Desafíos en la construcción de un índice compuesto

Adoptar un enfoque multidimensional conlleva importantes desafíos teóricos y metodológicos. En particular en cuanto a cómo considerar la distribución conjunta de las dimensiones dentro de una población y como resumir dimensiones heterogéneas en un solo índice (Aaberge y Brandolini, 2015). Un primer desafío surge de la necesidad de establecer reglas de compensación o *trade-offs* entre dimensiones: ¿cuánta ventaja en salud “compensa” una desventaja en ingresos, por ejemplo? Este problema requiere definir ponderaciones explícitas o una función de bienestar social que agregue las distintas dimensiones para cada individuo (por ejemplo, una suma ponderada lineal contra una media geométrica). La selección de pesos o la forma funcional (por ejemplo, una función con cierta elasticidad de sustitución entre dimensiones) incorporan juicios de valor acerca de la sustituibilidad entre logros en distintos aspectos del bienestar (Calia y Ferrante, 2024). Diferentes supuestos de compensación pueden llevar a estimaciones distintas de la desigualdad multidimensional, por lo que los investigadores deben justificar cuidadosamente estas elecciones.

Un segundo desafío es extender los conceptos clásicos de la teoría de la desigualdad al contexto multidimensional. Los índices tradicionales de desigualdad, como el coeficiente de Gini o el índice de Theil, son medidas univariadas, es decir, se calculan sobre una única variable (generalmente el ingreso o el consumo), aunque dicha variable podría ser un puntaje compuesto que resuma múltiples dimensiones. Por ello, cuentan con propiedades unidimensionales bien establecidas, como la dominancia de Lorenz, que permite comparar la desigualdad entre distintas distribuciones, y el criterio de transferencias progresivas de Pigou-Dalton. Este principio, en términos simples, sostiene que una redistribución de recursos de un individuo más rico hacia uno más pobre —sin alterar el orden relativo de los ingresos— reduce la desigualdad. Sin embargo, estas propiedades no se trasladan de manera directa a situaciones de múltiples dimensiones. En la práctica, las comparaciones basadas en la dominancia multidimensional suelen resultar en ordenamientos parciales, es decir, puede que ninguna distribución domine completamente a otra en todas las dimensiones, lo que deja la comparación incompleta.

Aunque el trabajo de Atkinson y Bourguignon (1982) es ampliamente reconocido por haber establecido un marco formal para la evaluación de la desigualdad multidimensional, existen antecedentes relevantes. Ya en 1956, Fisher introdujo el concepto de matriz de distribución para representar el bienestar individual en múltiples dimensiones, sentando las bases para un análisis conjunto de diversos atributos económicos (Fisher, 1956). Más adelante, Kolm (1977) generalizó el principio de transferencia de Pigou-Dalton al contexto multidimensional, proporcionando un criterio normativo fundamental para comparar distribuciones multidimensionales de bienestar.

Sobre esta base, Atkinson y Bourguignon (1982) desarrollaron una formalización más precisa del análisis de la desigualdad en contextos multidimensionales. Aunque no propusieron un índice único de desigualdad multidimensional, crearon criterios formales de comparación entre distribuciones, los llamados ordenamientos de dominancia. Su enfoque establece las condiciones bajo las que una distribución puede considerarse más igualitaria que otra, considerando las interdependencias entre los atributos del bienestar. En otras palabras, demostraron que una distribución con menor correlación entre las dimensiones debe ser preferida, ya que reduce la desigualdad conjunta.

Atkinson y Bourguignon (AB) utilizaron el concepto de “mayorización” en múltiples dimensiones para describir cómo un individuo puede mejorar en una dimensión y empeorar en otra sin que se alteren las distribuciones marginales. Esto les permitió formular los criterios de dominancia AB, que identifican cuándo una redistribución de recursos reduce inequívocamente la desigualdad. Estos criterios introdujeron las fronteras de Lorenz multidimensionales, que consideran todos los posibles resultados acumulativos en cada dimensión, dados los recursos y la población.

Una rama importante del análisis de dominancia multidimensional es el estudio de los perfiles de privación acumulativa. Decancq (2023) introduce las curvas de privación acumulativa como una herramienta para visualizar cómo se acumulan las privaciones entre las personas². Estas curvas muestran la proporción de personas que sufren privación en al menos k dimensiones. Si la curva de una distribución está siempre por encima de otra, indica mayor privación y, por ende, mayor desigualdad multidimensional. Las curvas se vinculan con el concepto de dominancia de intersección —una extensión de la dominancia estocástica que permite comparar distribuciones cuando sus curvas de acumulación se cruzan en lugar de una dominar completamente a la otra— y amplían el enfoque de dominancia estocástica, que consiste en comparar distribuciones en términos de bienestar o privación sin requerir una función de bienestar específica. Esto facilita la inclusión de la distribución conjunta de las privaciones en el análisis y puede inspirar la construcción de índices sintéticos, como el índice de “privación acumulativa” propuesto por Decancq (2023).

Estas extensiones teóricas proveen criterios normativos para afirmar cuándo una distribución es unánimemente más igualitaria que otra en todas las dimensiones. Sin embargo, dado que en la práctica esas condiciones estrictas rara vez se cumplen completamente, suele ser necesario recurrir a medidas sintéticas de desigualdad multidimensional (índices agregados) que implican escoger una forma de agregación (y, con ella, aceptar cierto compromiso normativo). En resumen, el enfoque multidimensional exige afrontar decisiones analíticas complejas —desde cómo ordenar y ponderar las distintas dimensiones hasta cómo reformular los principios clásicos de desigualdad— para obtener mediciones coherentes. Pese a estas dificultades, la literatura reciente ha logrado importantes avances metodológicos que permiten abordar de manera sistemática la desigualdad en múltiples dimensiones sin perder de vista el rigor axiomatizador heredado del enfoque unidimensional clásico de desigualdad.

C. Métodos para la construcción de índices compuestos multidimensionales

Un aspecto central en la elección del método de agregación es la unidad de análisis, lo que da lugar a dos enfoques principales: el de agregación por individuos (“filas”) y el de agregación por dimensiones (“columnas”). En el primer caso, la unidad es el individuo u hogar: se construye un puntaje de bienestar para cada persona y luego se mide la desigualdad entre personas. Esto exige disponer de microdatos

² Decancq (2020) introduce el diagrama de dependencia diagonal como una herramienta para medir la privación acumulativa, destacando cómo se alinean las posiciones de los individuos a través de diversas dimensiones del bienestar. Este enfoque amplía el análisis tradicional del bienestar multidimensional, que generalmente evalúa cada dimensión de manera independiente, al integrar la interdependencia entre ellas. Además, en un trabajo anterior, Decancq (2014) emplea funciones cópula para conceptualizar y medir la dependencia multidimensional, lo que permite capturar las correlaciones entre las posiciones de los individuos en las diferentes dimensiones del bienestar.

integrados que contengan información de todas las dimensiones para cada individuo en una misma fuente. En contraste, el enfoque basado en dimensiones permite que la unidad de análisis varíe según cada una de ellas: la desigualdad se calcula por separado en cada dimensión, pudiendo utilizar distintas fuentes de datos, y luego se agregan estos resultados en una medida sintética. Esta diferencia operativa tiene implicaciones prácticas relevantes en América Latina y el Caribe, donde frecuentemente los datos de salud, vivienda o educación no provienen de la misma encuesta que los de ingresos. La elección del enfoque, por tanto, no es solo metodológica sino también pragmática, y debe considerar la disponibilidad real de información integrada a nivel individual.

En las últimas décadas, los investigadores han desarrollado diversas metodologías para construir índices compuestos que capturen la desigualdad multidimensional. Estas metodologías difieren en cómo agregan la información, tanto entre las personas (dimensión poblacional) como entre las dimensiones de los atributos o indicadores. Estos enfoques son conocidos como agregación en dos pasos (por ejemplo, Dhongde et al., 2024). En los métodos de agregación en dos pasos, los datos multidimensionales se condensan en una primera fase (ya sea entre dimensiones o entre individuos), y luego se completa la agregación en la fase opuesta. La secuencia de la agregación es clave: en el enfoque “primero las filas” (individuos primero), se calcula una puntuación de bienestar para cada persona a partir de todas las dimensiones y luego se evalúa la desigualdad entre esas puntuaciones. En cambio, en el enfoque “primero las columnas” (dimensiones primero), se evalúa la desigualdad dentro de cada dimensión y luego se combinan esas evaluaciones en un índice general. Estos métodos suelen basarse en funciones equivalentes de bienestar, lo que impone formas funcionales específicas para garantizar una agregación coherente.

1. Agregación primero las filas (por individuos)

El enfoque por filas tiene su origen en la economía del bienestar. Se parte de una función de bienestar individual o “utilidad”, que sintetiza diversas dimensiones en un único valor para cada persona. Luego, la desigualdad se mide entre estos índices de bienestar individual utilizando un índice unidimensional. En esencia, asume que es posible definir para cada persona una medida resumen de su bienestar a partir de su vector de logros. Una forma común de hacerlo es mediante una función aditiva con ponderadores. Sin embargo, la “aditividad” completa implica que las dimensiones son perfectamente sustituibles, es decir, que pueden intercambiarse mediante compensaciones exactas según los pesos, lo que puede resultar cuestionable. Por tanto, este enfoque es normativo, ya que la elección de la función de bienestar involucra juicios de valor sobre las compensaciones entre dimensiones.

Para permitir distintos grados de sustitución entre dimensiones, Maasoumi (1986) sugirió usar una función de Elasticidad de Sustitución Constante (CES, por sus siglas en inglés) para calcular un “ingreso equivalente” para cada individuo. La forma CES introduce un parámetro de sustitución que refleja explícitamente una visión normativa sobre la importancia relativa de cada dimensión y la posibilidad de compensación entre ellas. Una vez calculado el índice de bienestar para cada persona, se aplica un índice tradicional de desigualdad unidimensional sobre la distribución. Maasoumi (1986) sugirió el uso de medidas estándar de desigualdad, como el índice de Atkinson o los índices de entropía generalizada (por ejemplo, el índice de Theil). Alternativamente, se podrían emplear índices dependientes del orden, como el coeficiente Gini generalizado, que ponderan las brechas entre personas según sus rangos.

Posteriormente, Tsui (1995) formalizó la extensión multidimensional de las medidas de desigualdad Atkinson-Kolm-Sen dentro de este enfoque, derivando axiomas que aseguran que cualquier agregación en dos etapas de una utilidad tipo CES conducirá a un índice de desigualdad multidimensional del tipo Atkinson. Estas medidas evalúan las disparidades entre individuos, con mayor peso en los sectores más desfavorecidos, y son flexibles en la ponderación de las distancias de bienestar, siendo sensibles a la magnitud y distribución de las desigualdades. En la misma línea, Decancq y Lugo (2012) proponen un enfoque basado en funciones de evaluación social que agregan los logros individuales en cada dimensión de bienestar antes de combinar estos logros a nivel individual. Este enfoque permite considerar cómo se distribuyen los logros a través de las dimensiones y cómo están correlacionadas esas dimensiones entre sí.

Como se mencionó, el enfoque de “primero las filas” tiene la ventaja de generar una única distribución sintética del bienestar, lo que lo hace compatible con un amplio conjunto de medidas unidimensionales de desigualdad y sus descomposiciones. Sin embargo, requiere la especificación de una función de utilidad adecuada, lo que implica la inclusión de ponderaciones normativas o parámetros de sustitución. Además, la medida de desigualdad resultante no sólo puede reflejar la desigualdad “pura”, sino también las pérdidas asociadas a la correlación imperfecta entre las dimensiones de bienestar entre individuos.

De hecho, Bosmans, Decancq y Ooghe (2015) critican estos índices normativos, argumentando que una medida de desigualdad multidimensional en dos etapas confunde intrínsecamente la desigualdad con la ineficiencia³. La razón que dan estos autores es que estos índices compuestos no sólo capturan la pérdida global de bienestar debido a distribuciones desiguales sino también las oportunidades no aprovechadas de redistribuir los bienes sin causar pérdidas para nadie. Esto puede llevar a una interpretación ambigua de la desigualdad, mezclando aspectos que deberían ser considerados por separado.

A pesar de estas críticas, el enfoque individual sigue siendo influyente y constituye la base de muchos análisis modernos en los que se calcula un nivel de bienestar multidimensional “equivalente a una distribución equitativa” para evaluar la desigualdad (por ejemplo, Foster y Lokshin 2024). Además, este enfoque capta la dependencia entre dimensiones y hace explícitos los juicios de valor: la elección del índice de bienestar individual refleja cómo se valora el balance entre dimensiones (*trade-offs*), y la elección del índice final refleja la aversión social a la desigualdad (Seth y Santos, 2021).

2. Agregación primero las columnas (por dimensiones)

Otra estrategia posible es invertir el orden de agregación: primero evaluar la desigualdad en cada dimensión por separado y luego combinar esos resultados en un índice global. Este enfoque suele basarse en el principio de “independencia del camino”, lo que significa que el índice produce el mismo resultado independientemente de si las dimensiones o los individuos se agregan primero (Foster y Shneyerov, 2000). En la práctica, la agregación por dimensiones implica ajustar el rendimiento medio de cada dimensión en función de la desigualdad, como, por ejemplo, calculando un valor “equivalente distribuido equitativamente” por dimensión, y luego combinar estos valores ajustados en un índice compuesto.

Un ejemplo conocido de este enfoque es el Índice de Desarrollo Humano Ajustado por la Desigualdad (IDH-D) utilizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2019). Este índice calcula, para cada dimensión (salud, educación, ingresos), el nivel de logro que, si se distribuyera uniformemente entre las personas, generaría el mismo bienestar social total que la distribución desigual real, utilizando una fórmula de aversión a la desigualdad de Atkinson. Luego, estos niveles de bienestar equivalente se agregan (generalmente mediante una media geométrica o aritmética) en el índice general. Este procedimiento da prioridad a las dimensiones, ya que la desigualdad se aborda a nivel de cada indicador antes de combinar las dimensiones.

Este enfoque fue explorado inicialmente por Anand y Sen (1993) y Hicks (1997), quienes abogaron por incorporar la desigualdad intradimensional en los índices compuestos de desarrollo. Por ejemplo, Hicks (1997) propuso un IDH ajustado por desigualdad, que penaliza las deficiencias en cada dimensión por su dispersión, aplicando efectivamente una corrección del índice de Atkinson a la salud y la educación junto con los ingresos. Un problema que surgió de estas propuestas fue que rompían una propiedad deseable del IDH original: no eran coherentes ni descomponibles entre subgrupos de población.

En respuesta, Foster, López-Calva y Székely (2005) desarrollaron una familia paramétrica de índices de desarrollo humano sensibles a la distribución, que preservan la “independencia del camino” y la coherencia entre subgrupos. Sus índices incluyen el IDH estándar como caso especial,

³ En un contexto de bienestar multidimensional, la ineficiencia ocurre cuando los individuos tienen diferentes preferencias o necesidades en cuanto a los bienes que consumen, pero las distribuciones actuales de esos bienes no permiten optimizar el bienestar de todos. Por ejemplo, si una persona tiene una mayor necesidad de un bien y otra persona de otro, podría ser posible realizar un intercambio de bienes entre ellas que las beneficie a ambas. Si este tipo de intercambios no se han realizado, entonces la distribución de los bienes se considera “ineficiente”, ya que no se ha logrado maximizar el bienestar total posible en la sociedad.

pero introducen un parámetro de aversión a la desigualdad para penalizar la desigualdad dimensional, mientras mantienen la aditividad entre grupos de población. Este trabajo sentó la base teórica para el IDH-D del PNUD, lo que permitió considerar el índice nacional como un compuesto de índices regionales o de grupo.

Por otro lado, Gajdos y Weymark (2005) desarrollaron una familia de índices basados en una generalización multidimensional del coeficiente de Gini. Estos índices calculan un bienestar equivalente distribuido uniformemente en cada dimensión y luego los promedian, un enfoque similar al del Índice de Desigualdad de Género (GDI, por su sigla en inglés) de las Naciones Unidas, que compara hombres y mujeres en cada dimensión, o al de Hicks (1997), quien realiza ajustes en sus mediciones. La principal ventaja de este enfoque es que garantiza propiedades útiles, como la descomposición por dimensiones, lo que permite identificar cuánto contribuye la desigualdad en cada dimensión al total. Además, es relativamente sencillo de calcular, incluso cuando los datos disponibles son limitados. De hecho, si las fuentes de datos para cada dimensión son distintas (por ejemplo, ingresos obtenidos de encuestas de hogares y salud proveniente de registros administrativos), este enfoque permite realizar ajustes por separado en cada dimensión. En cambio, un enfoque de fila-primero requeriría microdatos integrados para cada individuo en todas las dimensiones. Esta diferencia operativa es significativa en América Latina y el Caribe, donde a menudo los datos de salud o vivienda no están incluidos en la misma encuesta que los de ingresos.

En resumen, el enfoque de “primero la columna” genera medidas que ajustan la desigualdad “dimensión por dimensión”, es decir, cada dimensión se corrige por su propia desigualdad antes de ser combinada en el índice general. Este enfoque es especialmente popular en la economía del desarrollo y en los tableros de indicadores oficiales, ya que permite mostrar de manera clara y transparente cómo la desigualdad afecta a cada dimensión individualmente (por ejemplo, UNDP 2010). Sin embargo, a diferencia del enfoque “primero la fila”, este método asume que no hay sustitución posible entre dimensiones a nivel individual, ya que la desigualdad se aborda de manera independiente dentro de cada dimensión. Este enfoque puede considerarse una visión más “absoluta” de la privación, donde cada dimensión es esencial por sí misma, evitando la necesidad de una compensación explícita entre dimensiones (Foster et al., 2005).

No obstante, la gran desventaja de este enfoque es su insensibilidad a las brechas superpuestas. Al resumir cada dimensión independientemente, dos sociedades pueden obtener el mismo valor global incluso si en una las carencias están concentradas en las mismas personas y en otra están repartidas de forma distinta (Decancq, 2020). El IDH-D presenta precisamente este problema. Como reconocen las notas técnicas del Informe sobre Desarrollo Humano, su principal desventaja es que no es sensible a la asociación y, por lo mismo, no capta las desigualdades superpuestas (UNDP, 2024, Technical Notes, p. 7). Esto ocurre porque el IDH-D calcula la desigualdad dentro de cada dimensión por separado y luego las combina, por lo que, por su propia estructura, no incorpora la asociación efectiva entre resultados individuales en distintas dimensiones. En resumen, los índices compuestos que agregan primero las columnas pueden ser útiles cuando las restricciones de datos impiden un análisis conjunto, pero sacrifican la capacidad de detectar la interdependencia de las privaciones, una propiedad que —como se planteó con anterioridad— es sumamente valiosa.

D. Propiedades deseables de las medidas multidimensionales

Al diseñar o elegir una medida de desigualdad multidimensional, se buscan ciertas propiedades deseables que aseguren su buen comportamiento teórico y utilidad práctica. Los distintos enfoques metodológicos —ya sea agregando primero por individuos, por dimensiones o mediante métodos de conteo de privaciones— deben evaluarse a la luz de estos criterios comunes. A continuación, se enumeran y debaten algunas de las propiedades más relevantes, señalando brevemente, cuando sea posible, qué enfoques las satisfacen:

1. Simetría (anonimato)

Esta propiedad exige que la medida no dependa de la identidad de las personas sino sólo de sus logros o privaciones. En otras palabras, si dos personas intercambian completamente sus posiciones en todas las dimensiones, el valor del índice multidimensional permanece igual. Este principio garantiza imparcialidad: la medida trata distribuciones equivalentes de bienestar (o privación) de la misma forma sin importar quién posee qué combinación de logros. Todas las medidas estándar de desigualdad y pobreza satisfacen esta propiedad, heredada del enfoque unidimensional, asegurando que el índice refleje únicamente la estructura de distribución y no características individuales irrelevantes.

2. Invariancia al tamaño poblacional

Esta propiedad también conocida como el principio de población exige que si se duplica (o multiplica por cualquier factor) toda la población junto con sus atributos —es decir, se crea una copia idéntica de cada individuo— la medida de desigualdad multidimensional no cambia. Por ejemplo, dos países con la misma distribución relativa de bienestar, aunque uno tenga el doble de habitantes que el otro, deberían obtener el mismo valor del índice. Esta propiedad permite comparar consistentemente distribuciones en poblaciones de distinto tamaño y garantiza que el índice capture desigualdades relativas y no dependa simplemente del número de observaciones.

3. Invariancia de escala (medición relativa)

Dado que en el análisis multidimensional se combinan indicadores potencialmente medidos en distintas unidades, es deseable esta propiedad. En términos generales, la medida de desigualdad no debe cambiar ante transformaciones proporcionales comunes en las magnitudes de logro. Por ejemplo, si todas las personas mejoran sus ingresos en un 10% (manteniendo las demás dimensiones igual), un índice de desigualdad relativo debería permanecer sin cambios, puesto que las disparidades proporcionales no se han alterado. Análogamente, si se mide una dimensión en dólares o en miles de dólares, el resultado debe ser equivalente una vez ajustadas las unidades. La mayoría de los índices compuestos imponen alguna forma de normalización o ponderación que asegura esta propiedad, evitando que la elección arbitraria de unidades de medida o escalas numéricas distorsione las comparaciones de desigualdad entre dimensiones.

4. Normalización (cota cero en igualdad)

Ligada a lo anterior, esta propiedad garantiza que la medida tome un valor de referencia fácilmente interpretable en casos extremos. Típicamente se requiere que el índice sea cero cuando no hay desigualdad alguna en la distribución multidimensional. Esto implica que si todos los individuos tienen exactamente el mismo vector de logros en todas las dimensiones (por ejemplo, idéntico ingreso, nivel educativo, estado de salud, entre otros), la medida reportará ausencia de desigualdad. Este punto de referencia es crucial tanto teóricamente como para la comunicación de resultados, pues asegura que el índice solo marque desviaciones cuando existen diferencias efectivas en bienestar. Algunas medidas también establecen un valor máximo cuando la desigualdad es absoluta (por ejemplo, cuando una sola persona concentra todos los logros y los demás ninguno), acotando el rango del índice. En cualquier caso, la normalización en el extremo de igualdad perfecta facilita la comparación e interpretación de los resultados entre distintos países o grupos poblacionales.

5. Principio de transferencias progresivas de Pigou-Dalton

Cualquier medida razonable debería reflejar que si se realiza una transferencia de bienestar en una dimensión desde una persona relativamente aventajada hacia otra menos aventajada (sin que se invierta el orden de ambas en esa dimensión, y manteniendo todo lo demás constante), la desigualdad multidimensional no debe aumentar, y de preferencia debería disminuir. En términos simples, una redistribución progresiva en cualquier dimensión individual es deseable y debería reflejarse en una menor desigualdad global. Por ejemplo, si en la dimensión de educación se transfiere —como ejercicio teórico— un cierto nivel de logro

(por ejemplo, años de escolaridad) de un individuo más educado a otro con menor educación, la medida compuesta debería indicar una reducción de la desigualdad en esa dimensión y, por consiguiente, una reducción (o al menos no un aumento) de la desigualdad multidimensional total. Esta propiedad asegura sensibilidad a mejoras en la equidad intradimensional. Cualquier índice que la viole podría dar la paradoja de mostrar más desigualdad pese a haberse realizado una transferencia equitativa.

6. Sensibilidad a la dependencia entre dimensiones

Lo que distingue al análisis multidimensional es la consideración de cómo se acumulan o comparten las privaciones entre los individuos. Por ello, un buen índice multidimensional debe ser sensible a la distribución conjunta de los logros, no sólo a las distribuciones separadas de cada dimensión. En particular, las desigualdades deberían considerarse más graves cuando se yuxtaponen: es decir, cuando las mismas personas están rezagadas en múltiples dimensiones a la vez. Si las carencias se concentran en ciertos individuos (alta correlación de desventajas), la medida debería reflejar una mayor desigualdad que en otra situación con las mismas privaciones marginales pero distribuidas en personas diferentes. Este criterio —a veces llamado principio de transferencia multidimensional cruzada— extiende la idea de Pigou-Dalton: trasladar una privación de una persona muy desfavorecida a otra menos desfavorecida en otra dimensión debería reducir la desigualdad. Por ejemplo, considerar por separado la desigualdad de ingresos y la de salud podría pasar por alto si quienes tienen bajos ingresos son los mismos que tienen mala salud. Los índices “primero las filas” cumplen esto bajo ciertas condiciones. En cambio, los enfoques separables por dimensión (primero las columnas) violan esta propiedad por construcción. Dado que esta sensibilidad distingue el análisis multidimensional, muchos autores la consideran imprescindible.

7. Independencia del orden de agregación

Dado que existen distintos enfoques para agregar la información multidimensional —por ejemplo, calcular primero un índice de bienestar individual (enfoque “primero las filas”) o primero índices de desigualdad por dimensión (enfoque “primero las columnas”)—, es deseable que la medida final no dependa del orden en que se realice la agregación. La independencia de la trayectoria de agregación (o *path independence*) significa que el resultado sería el mismo sin importar si se combinan primero las dimensiones por persona o primero las personas por dimensión. Esta propiedad es valiosa porque garantiza que el índice multidimensional tiene una interpretación única, no ambigua, y que las diferencias entre medidas no se deben meramente a la secuencia de cálculo elegida sino a diferencias reales en la distribución.

8. Descomponibilidad por subgrupos poblacionales

Para la utilidad práctica en políticas públicas, una propiedad crucial es la descomponibilidad por subgrupos, también llamada coherencia entre subgrupos. Esta propiedad indica que la medida total de la población debe poder expresarse en función de las contribuciones de grupos poblacionales (por ejemplo, regiones, etnias, género, u otras), de modo coherente y consistente. Idealmente, un índice descomponible permite que la desigualdad multidimensional total se divida en partes atribuibles a cada subgrupo, generalmente de forma aditiva ponderada por la población. Esto implica, además, una condición de consistencia: si la desigualdad aumenta en uno de los subgrupos (y no cambia en los demás), entonces la desigualdad total no debería disminuir —de hecho, típicamente aumentará. Por ejemplo, si un país muestra una disminución de la desigualdad multidimensional total, una medida descomponible permitiría verificar si dicha mejora se refleja también en cada región o grupo demográfico, o si se debe a cambios en la composición poblacional. En caso contrario (falta de coherencia), el índice podría ocultar situaciones donde la desigualdad aumentó en algunos sectores, pero fue compensada por cambios en otros, llevando a conclusiones engañosas.

9. Descomposición por dimensiones

Además de desagregar por grupos de personas, es muy valioso poder descomponer la contribución de cada dimensión al valor del índice multidimensional. Esta propiedad no siempre se formula como un axioma estricto, pero resulta deseable para interpretar qué dimensiones del bienestar explican mayor proporción de

la desigualdad observada. Un índice que permita la descomposición por dimensiones facilitará identificar, por ejemplo, cuánto de la desigualdad multidimensional se debe a disparidades educativas, cuánto a disparidades de salud, de ingresos, vivienda, y otros. Esto ayuda a los formuladores de políticas a focalizar esfuerzos: si la mayor parte de la desigualdad proviene de la dimensión de ingresos, las políticas redistributivas económicas serán clave; si proviene de la salud, se requerirán intervenciones en ese ámbito, y así sucesivamente.

10. Robustez frente a cambios normativos moderados

Dado que cualquier índice compuesto involucra decisiones normativas (como los pesos, las funciones y los umbrales utilizados), una cualidad valiosa es que los resultados, como el ordenamiento de países o la identificación de los más desiguales, se mantengan estables ante variaciones razonables en estos supuestos. Aunque esta no es una propiedad formal exclusiva, generalmente se evalúa mediante análisis de sensibilidad. Por ejemplo, si la clasificación de países con altos niveles de desigualdad no cambia significativamente con diferentes combinaciones de pesos, el índice se considera robusto. Algunas medidas incluyen parámetros ajustables, como el índice de Atkinson multivariado, que tiene un parámetro de aversión a la desigualdad. Se espera que la tendencia general no se invierta drásticamente si se ajusta este parámetro. La robustez es esencial para la aceptación política de un índice regional: si pequeñas variaciones en los juicios de valor generan grandes diferencias en los resultados, es probable que surjan disputas.

En resumen, las propiedades anteriores constituyen un conjunto de criterios normativos para evaluar y comparar diferentes medidas multidimensionales. Ninguna medida única las satisface todas a la vez en igual grado, ya que a menudo existen compensaciones (*trade-offs*) entre ellas. Por ejemplo, aumentar la sensibilidad a la correlación entre dimensiones puede complejizar la descomposición. Por ello, al elegir un índice compuesto es crucial justificar qué propiedades se priorizan según el propósito del análisis. No obstante, las medidas más empleadas en la literatura reciente tienden a cumplir con las propiedades axiomáticas fundamentales (anonimato, invariancias, transferencias intradimensionales) y han mejorado progresivamente en satisfacer también la independencia del camino, la descomponibilidad y la sensibilidad a las interrelaciones. De estas propiedades, tres resultan particularmente relevantes para distinguir el enfoque multidimensional del unidimensional: el principio de transferencia extendido, la sensibilidad a la asociación entre dimensiones y la descomponibilidad por subgrupos. Así, el desarrollo de nuevas métricas multidimensionales se orienta a lograr un balance adecuado entre rigor teórico y aplicabilidad práctica, asegurando que los índices resultantes sean tanto sólidamente fundamentados como útiles para informar políticas públicas integrales.

E. Supuestos normativos y operativos de cada enfoque

Cada método descrito lleva implícitos supuestos normativos (valores sobre qué es una distribución más equitativa) y supuestos operativos (relativos a datos y medidas) que es importante hacer explícitos al aplicarlos, especialmente en América Latina y el Caribe:

1. Selección de dimensiones

Todos los enfoques multidimensionales comparten la decisión inicial de qué dimensiones incluir, lo que constituye un supuesto normativo fundamental. La elección de dimensiones suele apoyarse en marcos de derechos, en el enfoque de capacidades o en consensos internacionales (por ejemplo, las dimensiones consideradas en el Índice de Pobreza Multidimensional o en los Objetivos de Desarrollo Sostenible). Siguiendo el enfoque de desarrollo social inclusivo, la CEPAL (2016a) destaca la importancia de incorporar dimensiones más allá del ingreso, incluyendo educación, salud, trabajo, protección social, vivienda, entre otras. Un enfoque tipo tablero simplemente presenta múltiples dimensiones por separado, mientras que un índice compuesto asume implícitamente que todas esas dimensiones seleccionadas aportan conjuntamente a un concepto general de bienestar.

2. Ponderación de dimensiones

En un tablero de indicadores no se aplica ponderación (cada dimensión se reporta con su propio indicador de forma independiente), mientras que un índice compuesto requiere asignar pesos a cada dimensión al agregarlas. La elección de estos pesos tiene interpretaciones tanto normativas como operativas. Por un lado, puede adoptarse una postura normativa simple asumiendo que todas las dimensiones son igual de importantes, asignando a cada una un peso igual (es decir, cada dimensión cuenta por igual en el agregado). Por otro lado, los pesos pueden definirse empíricamente, por ejemplo, basándolos en la variabilidad estadística de cada indicador o en encuestas de opinión que reflejen prioridades públicas. Es común usar pesos iguales por motivos de transparencia y simplicidad; sin embargo, esto implica asumir que, por ejemplo, una brecha de 10% en salud tiene la misma relevancia que una brecha de 10% en educación. Dicho supuesto puede ser debatible, ya que diferentes dimensiones podrían considerarse de importancia distinta según el contexto o los valores sociales predominantes.

3. Escalas y transformaciones de variables

La manera en que se mide cada dimensión (unidades, escalas numéricas y transformaciones aplicadas) conlleva supuestos operativos importantes y, a veces, juicios normativos implícitos. En un tablero, cada indicador dimensional puede presentarse en su escala original (por ejemplo, años de escolaridad, ingresos en moneda local, u otros), dado que no es necesario combinarlos directamente. En cambio, al construir un índice compuesto es habitual normalizar o transformar los datos de cada dimensión para hacerlos comparables antes de agregarlos. Por ejemplo, puede fijarse un rango común de 0 a 1 para todos los indicadores o aplicar transformaciones como el logaritmo a los ingresos (como hace el IDH al suponer rendimientos decrecientes del ingreso). Estas decisiones operativas sobre la escala o la forma de cada variable implican a su vez supuestos normativos: elegir una transformación específica equivale a adoptar un criterio sobre cómo valorar incrementos o diferencias en esa dimensión (por ejemplo, usar logaritmos refleja el juicio de que las mejoras en ingreso adicional aportan progresivamente menos bienestar). Por tanto, la elección de escalas y transformaciones puede influir en los resultados comparativos de la desigualdad multidimensional y debe tomarse cuidadosamente para no distorsionar las comparaciones entre dimensiones.

4. Supuestos de sustitución/complementariedad

Un índice compuesto incorpora necesariamente un supuesto normativo sobre el grado en que las carencias en una dimensión pueden compensarse con logros en otra. Si la agregación es completamente aditiva (sumando indicadores ponderados), se está asumiendo que las dimensiones son perfectamente sustituibles entre sí: una desventaja importante en una dimensión podría quedar contrarrestada por una mejora suficiente en otra, según los pesos asignados. Este supuesto de compensación plena resulta controvertido, ya que implica una visión particular sobre qué tan intercambiables son distintos aspectos del bienestar. Algunos métodos han propuesto formas de agregación menos substitutiva —por ejemplo, utilizando funciones con elasticidad de sustitución constante (CES)— para restringir la posibilidad de compensar totalmente una dimensión con otra y así reflejar una postura normativa diferente (si las dimensiones se consideran complementarias o no perfectamente intercambiables, la fórmula agregada penaliza más las brechas en múltiples dimensiones). En contraste, un enfoque de tablero o cualquier método que evalúa cada dimensión por separado no permite sustitución a nivel individual: las privaciones en una dimensión no pueden ser aliviadas por logros en otra dentro del análisis, puesto que no se combinan en una única medida de bienestar. Esta visión puede considerarse una concepción más “absoluta” de la privación multidimensional, donde cada dimensión es esencial por sí misma y no se admite compensación entre ellas (Foster et al., 2005). La diferencia central es normativa. El enfoque compuesto define un *trade-off* explícito entre dimensiones, mientras que el enfoque por dimensiones separadas evita dicho juicio al tratar cada ámbito de forma independiente.

5. Datos requeridos e integrabilidad

Los requisitos de información difieren significativamente entre ambos enfoques, constituyendo supuestos operativos que condicionan su aplicación práctica. Un índice compuesto que agregue dimensiones a nivel individual exige contar con microdatos integrados, es decir, información de todas las dimensiones elegidas medida simultáneamente para las mismas personas (generalmente mediante una misma encuesta o fuente de datos unificada). Este requerimiento puede ser restrictivo: en América Latina y el Caribe, por ejemplo, a menudo los datos de ingreso, salud, educación o vivienda provienen de fuentes distintas o encuestas separadas, lo que dificulta su integración en una sola base individual. El enfoque de tablero (o cualquier método “primero las columnas”, que combina resultados por dimensión) es más flexible en términos de datos, ya que permite aprovechar fuentes distintas para cada indicador. Como cada dimensión se analiza por separado, es factible utilizar, por ejemplo, encuestas de hogares para ingreso y datos administrativos para salud, calibrando cada indicador de desigualdad por separado antes de combinarlos de alguna forma. De este modo, cuando los datos integrales son escasos, reportar un conjunto de indicadores por dimensión es operativamente más viable. Sin embargo, la contrapartida es que un índice compuesto verdaderamente conjunto ofrece un análisis integrado de las privaciones simultáneas, algo que el tablero no logra si no existen microdatos unificados. En síntesis, la disponibilidad y calidad de los datos condiciona qué enfoque es factible: el enfoque con agregación individual necesita información más exigente (todas las variables medidas juntas), mientras que el de indicadores separados puede adaptarse a limitaciones de datos heterogéneos.

6. Tratamiento de la heterogeneidad subnacional

La aplicabilidad y relevancia de cada enfoque pueden variar cuando se consideran diferencias al interior de un país (por regiones, grupos étnicos, estratos socioeconómicos, u otros). Un tablero de indicadores multidimensionales facilita la desagregación subnacional, ya que permite presentar la desigualdad en cada dimensión para distintas regiones o grupos poblacionales sin necesidad de unificar todo en una cifra nacional única. Por ejemplo, puede mostrarse la desigualdad educativa en cada provincia o la desigualdad en salud por área urbana/rural, resaltando disparidades específicas. En cambio, un índice compuesto nacional resume toda la información en un solo valor, que podría enmascarar disparidades internas significativas si no se desglosa. Si bien es posible calcular índices compuestos por subgrupo (por ejemplo, un índice separado para cada región, siempre que haya datos adecuados), esto implica asumir que la misma estructura de dimensiones y ponderaciones es válida en todos los subámbitos. Normativamente, utilizar un único esquema de ponderación y las mismas dimensiones a nivel nacional supone que se atribuye igual importancia a cada dimensión en cualquier contexto local, ignorando potencialmente que distintas regiones o comunidades puedan valorar de manera diferente ciertos aspectos del bienestar. Por otro lado, presentar resultados desagregados (sea mediante un tablero o mediante cálculos separados del índice compuesto) permite reflejar la diversidad de realidades subnacionales, aunque a costa de perder la simplicidad de una única cifra resumen. En definitiva, considerar la heterogeneidad subnacional implica decidir entre la comparabilidad global (mismo índice para todos, con supuestos uniformes) y la sensibilidad contextual (adaptar o desagregar las medidas para captar diferencias locales), lo cual es tanto un desafío operativo (disponibilidad de datos a nivel regional) como un asunto normativo sobre la universalidad o contextualidad de los criterios de bienestar.

En conjunto, cada enfoque conlleva un conjunto distinto de supuestos valorativos y técnicos que tienen consecuencias tanto normativas como operativas. El enfoque tipo tablero privilegia la transparencia y el detalle de cada dimensión, evitando realizar agregaciones que impliquen juicios de valor sobre compensaciones; no obstante, brinda múltiples indicadores en lugar de una medida única integrada y puede dejar sin captar la interacción entre privaciones. Por su parte, los índices compuestos proveen una medida sintética de la desigualdad multidimensional, facilitando comparaciones generales,

pero para ello es necesario adoptar decisiones normativas explícitas (qué dimensiones importar y en qué magnitud relativa, cuánta compensación se admite entre ellas) y cumplir con exigencias de datos más estrictas. La elección entre uno u otro enfoque tendrá, por lo tanto, implicancias normativas —respecto de cómo se concibe una distribución equitativa del bienestar y qué juicios de valor se incorporan en la medición— y repercusiones prácticas en términos de datos necesarios, facilidad de comunicación y pertinencia analítica. En última instancia, la decisión debe alinearse con los objetivos del análisis y las condiciones del contexto: por ejemplo, si se busca influir en políticas integrales con una señal resumida o si se prefiere diagnosticar áreas específicas de rezago, y si se cuenta o no con información lo suficientemente detallada para respaldar una medición multidimensional integrada. Así, comprender los supuestos subyacentes a cada enfoque permite aplicar la herramienta más adecuada, evaluando conscientemente los *trade-offs* entre rigor normativo y viabilidad operativa que cada alternativa implica.

III. Abordaje metodológico para la construcción de un índice de desigualdad multidimensional (IDM)

Los marcos conceptuales y debates metodológicos revisados en las secciones anteriores proporcionan las bases necesarias para formular una propuesta concreta de medición. Esta sección presenta la propuesta metodológica adoptada para la construcción de un Índice de Desigualdad Social Multidimensional (IDM) para América Latina y el Caribe. La propuesta combina el marco metodológico propuesto por Foster y Lokshin (2024) con una orientación estratégica hacia la formulación de políticas públicas, y se fundamenta en los desarrollos conceptuales y empíricos discutidos previamente. Las decisiones metodológicas aquí descritas mantienen la coherencia con el marco analítico de la desigualdad de la CEPAL (CEPAL, 2016a y 2024) y con la experiencia acumulada por la CEPAL en torno a la construcción del Índice de Pobreza Multidimensional regional (IPM-AL) lanzado en 2025 (CEPAL, 2025).

A. Principios orientadores

El diseño de una medida regional de desigualdad social multidimensional requiere, entre otros factores, un conjunto de principios orientadores que guíen las decisiones normativas, metodológicas y operativas involucradas. El IDM debe concebirse como una herramienta analítica e institucional, más que un ejercicio meramente técnico. En esta línea, Foster (2025) propone siete principios destinados a asegurar que la medida no solo sea conceptualmente sólida y técnicamente rigurosa, sino también útil, viable y legítima para el apoyo en la implementación de políticas públicas en el contexto de América Latina y el Caribe.

1. Ser comprensible y fácil de describir

Una medida de desigualdad multidimensional debe ser comprensible para públicos diversos y fácil de describir. Debe poder ser explicada de forma clara tanto a especialistas como a tomadores de decisión y a la ciudadanía, sin perder su potencia analítica. Un índice excesivamente técnico o críptico corre el riesgo de limitar su difusión, apropiación institucional y, en última instancia, su impacto en la política pública. En cambio, una métrica conceptualmente clara y comunicacionalmente accesible facilita su integración en el debate público y su uso en estrategias de seguimiento y evaluación. Esta comprensibilidad permite,

además, anclar el IDM en los marcos de rendición de cuentas, acercando su interpretación al terreno de las decisiones concretas. En este sentido, es clave que el índice no sólo sea técnicamente correcto, sino que tenga un diseño comprensible, interpretable y con un mensaje claro sobre el tipo de desigualdad que se está visibilizando. Este principio apunta a la comunicación pública y la apropiación política del índice, y se distingue de la replicabilidad (principio 4.1.6) que se refiere a la capacidad técnica de que distintos equipos reproduzcan el cálculo de forma independiente.

2. Ajustarse a una noción de desigualdad de sentido común

El índice debe ajustarse a una noción de desigualdad social que tenga sentido común, es decir, que refleje de forma intuitiva lo que muchas personas —y responsables de política— reconocen como desigualdad. Esto implica que la medida debe ser sensible a la acumulación de desventajas, reconociendo que cuando múltiples privaciones recaen sobre las mismas personas, el problema es mayor que si estuvieran distribuidas de forma aleatoria. Esta sensibilidad permite reflejar lo que algunos autores denominan “desventajas corrosivas”: combinaciones de carencias que no sólo coexisten, sino que se agravan mutuamente. En la región, esta lógica está en el centro de los debates de la desigualdad desarrollados por la CEPAL (CEPAL 2016a y 2024), que muestra cómo la desigualdad es multidimensional y para enfrentarla se requiere del diseño e implementación que sea integral y capture esta interdependencia entre las distintas dimensiones que se refuerzan y expanden. Por ello, la medida debe ser capaz de capturar esa interdependencia, permitiendo visibilizar tanto los niveles generales de desigualdad como las formas específicas en que se manifiesta y se acumula.

3. Ajustarse al propósito para el que se está desarrollando

Un principio clave es que toda medida debe responder a un propósito explícito y estar alineada con los objetivos normativos, analíticos o políticos que se espera que cumpla. La coherencia entre el diseño del índice y su finalidad práctica es fundamental para su utilidad. Por ejemplo, si la medida busca orientar políticas de cohesión social, debe reflejar brechas entre grupos poblacionales relevantes y que permita una desagregación territorial. Si se diseña para monitorear el cumplimiento de derechos o los avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), debe articularse con el enfoque de derechos humanos o el enfoque de capacidades, identificando privaciones relevantes desde una perspectiva normativa. Un índice desalineado con su propósito puede resultar irrelevante o incluso confuso, mientras que una medida coherente con su función se convierte en una herramienta operativa valiosa. Por tanto, este principio requiere anclar el diseño en marcos conceptuales sólidos, en las prioridades sociales de la región y en los usos esperados por parte de los gobiernos e instituciones que lo implementarán.

4. Ser técnicamente sólido

La solidez técnica de la medida implica que esté respaldada por una base metodológica robusta y coherente con los desarrollos más recientes en la medición de desigualdad multidimensional. Esto significa cumplir con propiedades normativas deseables, o axiomas, como el principio de monotonía —la desigualdad debe disminuir si mejoran las condiciones sin empeorar las de nadie—, el principio de sensibilidad a la dependencia —la medida debe captar la acumulación de desventajas en las mismas personas—, y el principio de reordenamiento no equitativo —si una persona pasa a concentrar peores resultados en varias dimensiones, la medida no debe indicar una mejora. Cabe señalar que los principios de monotonía y reordenamiento no equitativo complementan las propiedades axiomáticas deseables de las medidas multidimensionales discutidas en el capítulo II.D. Asimismo, debe ser compatible con propiedades clásicas como el anonimato y la independencia de escala. La solidez técnica también se expresa en la capacidad del IDM para ser descompuesto en componentes por dimensión o por grupo poblacional, permitiendo así un análisis detallado y útil para la formulación de políticas. Es igualmente importante que las decisiones metodológicas —selección de indicadores, normalización, ponderación y medida final de desigualdad— sean transparentes y estén justificadas empírica o normativamente.

5. Ser operativamente viable

Una medida de desigualdad multidimensional debe ser viable en términos operativos. Esto significa que debe poder implementarse en contextos reales, con las capacidades estadísticas existentes y sin requerimientos técnicos o financieros desproporcionados. Los datos necesarios para calcular la medida deben estar disponibles o ser factibles de recopilar con un esfuerzo razonable. Idealmente, el índice debe basarse en fuentes comunes y accesibles en toda la región, como las encuestas de hogares armonizadas. La propuesta debe ser también actualizable periódicamente, permitiendo un seguimiento continuo de las desigualdades. Dado que la realidad regional muestra una alta heterogeneidad en capacidades estadísticas, este principio requiere una estrategia de implementación progresiva. Se sugiere adoptar un enfoque incremental: comenzar con una versión básica del índice, utilizando las variables disponibles, y avanzar hacia formas más refinadas a medida que se fortalezca la infraestructura de datos. Esta flexibilidad también permite que el IDM evolucione con el tiempo, integrando nuevas dimensiones o metodologías conforme surjan mejores prácticas.

6. Ser fácilmente replicable

El principio de replicabilidad se refiere a la posibilidad de que diferentes equipos técnicos, en distintos países o momentos, puedan calcular el índice de forma consistente, obteniendo los mismos resultados si usan los mismos datos y métodos. La replicabilidad es fundamental para garantizar la transparencia, fomentar la rendición de cuentas y facilitar el diálogo técnico. Para ello, la medida debe tener una metodología clara, bien documentada y basada en decisiones normativas explícitas. También es recomendable que los cálculos puedan realizarse con herramientas estadísticas de acceso libre o generalizado. La replicabilidad promueve el aprendizaje horizontal entre países, facilita procesos de revisión entre pares y permite que diversos actores (incluyendo sociedad civil y academia) participen del monitoreo y la validación de los resultados. En términos institucionales, una medida replicable refuerza su legitimidad como bien público regional y contribuye a la consolidación de estándares compartidos.

7. Respetar los incentivos de cada país

Por último, toda medida debe respetar los incentivos institucionales, técnicos y políticos de los países que la aplicarán. Dado el carácter regional de la propuesta, es crucial reconocer la diversidad de realidades en términos de estructuras económicas, capacidades estadísticas, marcos legales y sensibilidades políticas. El índice no debe generar efectos contraproducentes, como rankings punitivos entre países o incentivos para ocultar información. En cambio, debe promover una lógica de cooperación, aprendizaje y mejora continua. Esto implica permitir cierto margen de flexibilidad para adaptaciones nacionales, como la incorporación de módulos adicionales específicos a cada contexto, siempre que se mantenga la comparabilidad básica. Asimismo, el diseño debe ser lo suficientemente transparente para evitar interpretaciones sesgadas o usos inadecuados de los resultados. Este principio también alienta procesos de co-creación y diálogo técnico entre países, liderados por instituciones regionales como la CEPAL, lo que fortalece el sentido de pertenencia y sostenibilidad del IDM en el tiempo.

Estos siete principios proporcionan un marco estratégico para orientar las decisiones metodológicas asociadas al diseño de una medida regional de desigualdad multidimensional. En conjunto, permiten asegurar que la propuesta sea conceptualmente robusta, operativamente viable y políticamente legítima. Su valor reside precisamente en combinar el rigor técnico con la pertinencia normativa y práctica, promoviendo una herramienta útil para el análisis y la acción. En este contexto, la CEPAL puede desempeñar un rol central como articuladora de consensos metodológicos entre los países de la región, favoreciendo una adopción amplia y sostenida. Con estos fundamentos establecidos, el siguiente paso consiste en abordar las decisiones clave de diseño: qué dimensiones seleccionar, qué indicadores utilizar, cómo combinarlos en una medida sintética, y qué fuentes de datos permiten su construcción comparada y periódica.

B. Selección de dimensiones e indicadores

La definición de qué dimensiones e indicadores específicos integrarán el IDM es una decisión fundamental y de carácter normativo. Debe guardar coherencia con los marcos analíticos revisados (por ejemplo, el enfoque de capacidades de Sen, la matriz de desigualdad social y los principales factores o causas que contribuyen a explicar la desigualdad (CEPAL 2016 y 2024) y con las prácticas recientes como el nuevo Índice de Pobreza Multidimensional para América Latina (IPM-AL) presentado por CEPAL en 2025. En este contexto, se recomiendan las siguientes dimensiones, cada una respaldada por indicadores clave, para una primera propuesta de medición en América Latina:

1. Selección de indicadores específicos

Para cada dimensión, se sugiere escoger un conjunto reducido de indicadores que capten distintos aspectos dentro de la misma. Por ejemplo, en vivienda: uno de calidad estructural (materiales/hacinamiento) y otro de servicios (agua, saneamiento) y posiblemente uno de conectividad digital. En educación: uno de cantidad (años o nivel alcanzado) y otro de asistencia escolar. En empleo: uno de acceso (desempleo) y otro de calidad (formalidad o ingresos bajos). En salud: uno de acceso (seguro) y uno de resultado (nutrición o mortalidad infantil). En protección social: uno de pensión en la población mayor y quizá uno de protección en activos (seguro de desempleo u otro, si existiera). Idealmente, los indicadores dentro de cada dimensión podrían agregarse en un subíndice de dimensión (por ejemplo, un promedio ponderado de privaciones dentro de la dimensión, similar a cómo el IPM compone múltiples indicadores en cada dimensión). Esto permite que cada persona/hogar reciba una puntuación por dimensión. Sin embargo, si la cantidad de indicadores por dimensión es limitada (1 o 2), podría considerarse incorporarlos separadamente en la etapa de agregación multidimensional sin perder simplicidad.

2. Ponderación de dimensiones

Se propone, como punto de partida, asignar ponderaciones iguales a las dimensiones seleccionadas. Es decir, cada dimensión contribuiría en igual proporción al índice compuesto. Esta elección sigue el criterio de paridad de importancia, utilizado también en muchos IPM (donde cada dimensión tiene el mismo peso) y justificado por la ausencia de consenso para valorar una dimensión sobre otra. No obstante, se reconoce que las ponderaciones son en sí una declaración normativa; por ende, deben ser discutidas con actores regionales. La metodología de Foster y Lokshin (2024) permite incorporar ponderaciones normativas explícitas en la agregación, sustituyendo las normalizaciones ad-hoc por valores que reflejen prioridades de política. Por ejemplo, si a nivel regional se concluye que la salud merece un peso mayor porque sus brechas son más críticas o porque es condición para las demás, se podría asignar un peso superior. En cualquier caso, la recomendación inicial es usar pesos iguales para facilitar la aceptación del índice (evitando controversias sobre la prioridad de un sector sobre otro) y porque empíricamente se desea primero observar la panorámica general. Las ponderaciones podrán refinarse tras análisis de sensibilidad —por ejemplo, probando el impacto en los resultados de usar distintos esquemas de ponderación— y mediante debate informado que considere la economía política de estas decisiones, en el que los países podrían consensuar ajustes según sus visiones de desarrollo.

3. Definiciones armonizadas

Para garantizar comparabilidad, cada indicador deberá ser definido de manera uniforme en lo posible. En el corto plazo, se sugiere trabajar con los datos disponibles en encuestas de hogares —lo que puede implicar utilizar definiciones próximas, aunque no idénticas, en cada país—, pero deberá documentarse cuidadosamente cualquier diferencia. En el mediano plazo, con la encuesta especializada (ver más adelante), puede estandarizarse completamente el módulo de preguntas en todos los países para obtener indicadores perfectamente comparables. Adicionalmente, se recomienda verificar la validez estadística de cada indicador candidato: su distribución, su correlación con otros indicadores y su capacidad de discriminar diferentes

niveles de bienestar. Indicadores con muy poca variación (por ejemplo, un servicio al que ya tiene acceso más del 95% de la población en la mayoría de los países) aportan poco a la medición de la desigualdad y podrían excluirse o reemplazarse por otros más relevantes. Del mismo modo, indicadores muy específicos o no disponibles ampliamente deberán evitarse en esta primera propuesta. Por ejemplo, la “calidad del aire interior” —entendida como la exposición a contaminantes dentro del hogar por uso de combustibles sólidos para cocinar o calefaccionar sin ventilación adecuada— puede ser un factor relevante para la salud, especialmente en zonas rurales, pero actualmente no existen datos comparables en las encuestas de hogares de todos los países. En esos casos, se sugiere priorizar indicadores con mayor cobertura y posibilidad de armonización. Se sugiere apoyarse en la experiencia del reciente IPM regional. La CEPAL seleccionó indicadores realizables en al menos 17 países, y esa lección puede guiar la selección aquí, priorizando factibilidad y cobertura de datos. Adicionalmente, se deberán documentar cuidadosamente cualquier adaptación local en indicadores. Por ejemplo, si un país no recoge cierto dato y se usa un proxy alternativo, eso deberá tenerse en cuenta al comparar su índice con el de otros. La armonización regional implica también un esfuerzo de fortalecimiento de capacidades estadísticas: CEPAL y otros organismos (como el BID, Banco Mundial, PNUD) pueden colaborar en asistir a las oficinas nacionales de estadística para integrar módulos comparables en sus encuestas y para calcular correctamente el índice. Esto responde al llamado de CEPAL de fortalecer capacidades estadísticas nacionales para superar los desafíos de datos en la medición multidimensional.

En síntesis, la selección de dimensiones e indicadores debe alinearse con las prioridades de bienestar de la región y, al mismo tiempo, reconocer las restricciones que hoy impone la información comparable. El diseño normativo aquí propuesto abarca cinco dimensiones no monetarias; la implementación empírica que se presenta en la sección IV traduce ese horizonte a una versión operativa basada en los indicadores efectivamente disponibles y armonizables. La relación entre ambas escalas —horizonte normativo y piloto empírico— se desarrolla a continuación.

C. Alcance empírico y decisiones de operacionalización

1. Criterios de operacionalización y consideraciones de comparabilidad

La propuesta conceptual desarrollada en este documento es deliberadamente más amplia que la implementación empírica disponible en la actualidad. Esta diferencia no debe leerse como una inconsistencia, sino como el resultado de un criterio de operacionalización que busca equilibrar relevancia sustantiva, comparabilidad regional y factibilidad estadística. En otros términos, el diseño conceptual fija el horizonte normativo del índice; la implementación empírica selecciona, dentro de ese horizonte, aquellas variables que hoy pueden medirse de manera homogénea en un conjunto amplio de países.

Por esa razón, algunas dimensiones se representan mediante proxys más acotados que el repertorio conceptual inicialmente discutido. En salud, por ejemplo, la aplicación empírica privilegia agua, saneamiento y seguro de salud: el primer par capta determinantes sociales básicos de la salud y el tercero aproxima cobertura y protección financiera frente al riesgo. En vivienda, la razón dormitorios por persona se utiliza como una medida robusta y altamente comparable de hacinamiento, aun cuando no agota la calidad del hábitat. En empleo y pensiones, la estrategia combina suficiencia de ingresos, inserción contributiva y estabilidad laboral, aceptando que la calidad del trabajo es un fenómeno más amplio que el que hoy puede captarse de forma homogénea en el Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

Estas decisiones suponen, además, reconocer que algunas variables podrían clasificarse conceptualmente en más de una dimensión. Agua y saneamiento, por ejemplo, pueden leerse como parte del hábitat y, al mismo tiempo, como determinantes básicos de salud. En esta versión se los ubica en la dimensión salud porque su contribución analítica principal es aproximar condiciones mínimas para evitar riesgos sanitarios, sin perjuicio de que una versión futura del índice pueda reordenar o ampliar estos indicadores.

2. Dos versiones del índice: propuesta normativa e implementación empírica

La discusión sobre la dimensión ingreso requiere un tratamiento separado. Desde una perspectiva normativa de largo plazo, el propósito del IDM es complementar la medición de la desigualdad de ingresos. Desde una perspectiva empírica, sin embargo, incorporar el ingreso puede ser útil para observar cómo se articula con otras desigualdades del bienestar. Por ello, este documento distingue entre dos versiones del índice. Un IDM no monetario, concebido como horizonte normativo, y un IDM ampliado, utilizado aquí como piloto empírico (véase el cuadro 1).

El IDM no monetario se compone de cinco dimensiones —educación, salud, vivienda y hábitat, empleo y calidad del trabajo, y, protección social⁴— con ponderaciones iguales (20% cada una). La aplicación empírica presentada en este documento adopta una versión operativa de cinco dimensiones, en la que el ingreso recibe un peso de 50% y las cuatro dimensiones no monetarias restantes —educación, salud, vivienda y empleo/pensiones— reciben 12,5% cada una. Esta reorganización responde a restricciones de comparabilidad en BADEHOG y permite evaluar, de manera exploratoria, la interacción entre desigualdad monetaria y no monetaria.

Cuadro 1
Comparación entre la propuesta normativa y la implementación empírica del IDM

Aspectos a comparar	IDM no monetario (propuesta normativa)	IDM ampliado (implementación empírica)
Propósito	Complementar la medición tradicional de desigualdad de ingresos y visibilizar brechas no monetarias.	Explorar la interacción entre ingreso y dimensiones no monetarias en una primera aplicación comparada.
Dimensiones	Educación, salud, vivienda, empleo y protección social.	Ingreso, educación, vivienda, salud y empleo/pensiones.
Ponderaciones	20% para cada dimensión.	50% para ingreso y 12,5% para cada dimensión no monetaria.
Unidad de análisis	Abierta a definición según la estrategia estadística futura.	Individuos ^a , por disponibilidad y comparabilidad de la información en BADEHOG.
Uso esperado	Seguimiento regional de desigualdades estructurales no monetarias.	Piloto empírico para evaluar factibilidad, niveles y estructura de la desigualdad.

Fuente: Elaboración propia.

^a La construcción de características se realiza a nivel de hogares, mientras que las estimaciones de desigualdad son realizadas para la población.

Ambas versiones del índice son complementarias y responden a propósitos distintos. El IDM no monetario visibiliza desigualdades estructurales que quedan eclipsadas cuando se atiende exclusivamente a la distribución monetaria; el IDM ampliado permite capturar cómo el ingreso interactúa con las demás dimensiones, amplificando o atenuando las brechas de bienestar. Esta distinción es una decisión de diseño deliberada, no una inconsistencia, y futuras implementaciones podrán explorar ambas versiones según los objetivos de política pública específicos.

Es importante señalar que la inclusión o exclusión del ingreso no es una cuestión cerrada en la literatura ni en el debate regional. Futuras aplicaciones podrán optar por estimar ambas versiones en paralelo, ensayar esquemas alternativos de ponderación e incorporar nuevas dimensiones cuando la disponibilidad de datos comparables y la justificación normativa lo permitan.

⁴ La protección social se entiende aquí en sentido amplio, como el conjunto de mecanismos —contributivos y no contributivos— que protegen a las personas frente a riesgos del ciclo de vida y contingencias laborales: pensiones, seguros de salud, protección frente al desempleo, licencias y transferencias monetarias, entre otros. En la implementación empírica, en cambio, protección social no se incluye como dimensión independiente por dos razones. Primero, BADEHOG no permite construir un indicador comparable que capture el conjunto de sus componentes de manera armonizada entre países. Segundo, el componente con mejor cobertura comparada —las pensiones contributivas— se integra en la dimensión de empleo y calidad del trabajo, en tanto expresa la continuidad del vínculo contributivo a lo largo del ciclo de vida.

D. Formulación de un índice de desigualdad social multidimensional

Definidas las dimensiones e indicadores, el desafío central es establecer la forma de agregación que permita resumir la desigualdad conjunta. Como se ha desarrollado en este documento existen dos enfoques generales en la literatura: i) mantener un tablero separado de desigualdades en cada dimensión, o ii) construir un índice compuesto único. El enfoque de tablero (individual) reporta, por ejemplo, el coeficiente de Gini de ingreso, junto con la desigualdad educacional (medida quizá por la variancia de años de escolaridad) y otros indicadores por separado. Si bien esto provee riqueza de detalles, dificulta una visión integrada; no es trivial comparar si la desigualdad “total” es mayor en país A o B cuando difieren dimensión por dimensión. Además, evaluar cada dimensión de manera aislada ignora la manera en que las privaciones o ventajas coinciden en las mismas personas, es decir, no capta la dependencia entre dimensiones.

Por estas razones, la recomendación es avanzar hacia un índice compuesto de desigualdad multidimensional, complementado por análisis específicos por dimensión. Un índice sintético hace posible resumir en una cifra el grado en que el bienestar está desigualmente distribuido considerando varias dimensiones a la vez. Foster y Lokshin (2024) señalan que, para fines de monitoreo en políticas públicas, ningún indicador único multidimensional se ha usado regularmente, en parte por la falta de consenso metodológico.

Se recomienda adoptar un índice compuesto a través de un esquema tradicional de dos etapas para calcular la desigualdad multidimensional, siguiendo la línea de Maasoumi (1986) y formalizada recientemente por Foster y Lokshin (2024). En la primera etapa, se agrega la información de las múltiples dimensiones para obtener un único indicador de bienestar multidimensional por individuo u hogar. En la segunda etapa, se aplica una medida estándar de desigualdad unidimensional a la distribución de ese indicador agregado en la población. En la implementación empírica de este documento, la unidad de análisis son los individuos.

1. Forma de agregación adecuada

Un resultado clave de Foster y Lokshin (2024) es la identificación de la forma precisa de agregación que garantiza que las medidas obtenidas cumplan ciertos axiomas deseables. En particular, ellos demuestran que si la función de agregación es lineal (es decir, esencialmente una media ponderada de los logros en cada dimensión), entonces las medidas de dos etapas pueden satisfacer incluso axiomas exigentes como el mencionado de reordenamiento no equitativo. Esta forma aditiva garantiza que el índice general responda apropiadamente a los cambios en cada dimensión y que la desigualdad pueda descomponerse de manera significativa. Con un agregado lineal en su lugar, cualquier medida de desigualdad convencional $I(\cdot)$ (como el Gini, Theil, índice de Atkinson, o entropía generalizada) puede aplicarse a la variable de bienestar para obtener un valor de desigualdad multidimensional. Esta suma ponderada produce un “puntaje de bienestar multidimensional” para cada persona. Una agregación lineal de este tipo es transparente (puede explicarse como una suma de logros ponderados) y es necesaria para la solidez axiomática del índice final. Formas no lineales (por ejemplo, una función geométrica o mínima) podrían violar algunas propiedades de equidad, por lo que en esta primera propuesta se preferirá la simple y robusta combinación lineal.

2. Descomposición del índice de desigualdad multidimensional

Además, este enfoque permite una descomposición especialmente útil para la interpretación sustantiva del índice. Una vez construido un puntaje único de bienestar para cada unidad, es posible comparar la desigualdad efectivamente observada con la desigualdad máxima que existiría si todas las ventajas y desventajas estuvieran perfectamente alineadas entre dimensiones. Ese escenario comonotónico —donde quienes se ubican arriba en una dimensión también lo hacen en todas las demás— ofrece una referencia para identificar cuánto de la desigualdad agregada proviene de las brechas marginales de cada dimensión y cuánto depende del patrón de solapamiento entre ellas.

$$I_{\text{total}} = I_{\text{d-específico}} - R_{\text{d-solapamiento}} - S \quad (1)$$

En la ecuación (1), I_{total} representa la desigualdad multidimensional total, $I_{\text{d-específico}}$ el agregado de las desigualdades específicas por dimensión, $R_{\text{d-solapamiento}}$ el efecto de reclasificación o solapamiento, y S un término estructural que refleja diferencias en la forma relativa de las distribuciones entre funciones. El componente $I_{\text{d-específico}}$ puede obtenerse sumando las contribuciones de desigualdad de cada dimensión por separado—por ejemplo, una suma ponderada de coeficientes de Gini de ingreso, educación, vivienda, salud y empleo/pensiones— utilizando los pesos elegidos. Cuando la medida final es aditivamente descomponible y lineal en resultados, $I_{\text{d-específico}}$ coincide con la desigualdad máxima comonotónica I_{max} ; con el índice de Gini, además, el término estructural S se anula. El componente $R_{\text{d-solapamiento}}$ identifica, entonces, la porción de desigualdad que deja de observarse porque las desventajas no recaen de manera perfectamente superpuesta sobre los mismos hogares. Por el contrario, si se emplearan medidas no lineales, como Theil S , recogería la discrepancia entre la suma de las desigualdades marginales y la desigualdad del bienestar agregado. En este estudio se privilegia el coeficiente de Gini, lo que permite concentrar la interpretación en los componentes intradimensional e interdimensional.

En suma, la propuesta metodológica combina una forma de agregación simple y transparente con una descomposición sustantivamente rica. La primera hace posible construir una métrica sintética y comunicable; la segunda permite identificar si la desigualdad proviene, sobre todo, de brechas muy elevadas dentro de algunas dimensiones o de la superposición de desventajas en los mismos hogares. Sobre esta base se detallan, a continuación, las decisiones operativas que vuelven posible la aplicación empírica del índice.

3. Normalización y calibración de las variables

Para combinar distintos componentes dentro de dimensiones heterogéneas es necesario orientar sus indicadores a una métrica con orientación común. En esta propuesta, cada variable no continua se transforma en un puntaje de logro entre 0 y 100, donde 0 corresponde a la peor situación observada o normativamente definida y 100 al mejor desempeño. Las variables continuas son también expresadas como una función creciente sobre el mejor desempeño. Esta decisión facilita la agregación, preserva la intuición sustantiva de los indicadores y permite trabajar con variables binarias, ordinales y continuas dentro de un mismo esquema.

- Variables binarias. Se asigna 0 a la situación de privación y 100 a la situación no privada. Por ejemplo, no tener acceso a agua potable recibe 0 en el subíndice de vivienda, mientras tener acceso recibe 100. Esto equivale a tratar el “logro” como 0% o 100% alcanzado en ese aspecto.
- Variables ordinales. Se transforman en una escala continua que refleje el grado de logro asociado a cada categoría. Por ejemplo, el nivel educativo del adulto (sin educación, primaria, secundaria, terciaria) puede expresarse como un puntaje en función de los años de escolaridad, reescalados entre 0 y 100 (0 años = 0; primaria completa ≈ 33; secundaria completa ≈ 66; terciaria = 100), lo que permite representar de manera gradual los avances entre niveles. Alternativamente, los valores pueden asignarse según la posición relativa de cada categoría, fijando un mínimo y un máximo (0 y 100) y distribuyendo los niveles intermedios de forma equidistante o en función de criterios normativos; por ejemplo, considerando la educación secundaria completa como el umbral deseable (100) y escalando los niveles inferiores en relación con ese objetivo. De este modo, todas las variables quedan expresadas en una escala comparable de logro (0-100), lo que facilita su agregación.
- Variables continuas. Los indicadores continuos mantienen sus distribuciones si expresan de manera creciente su impacto sobre el bienestar de los individuos u hogares (como el ingreso o esperanza de vida, por ejemplo). Para aquellos que tienen una orientación contraria, son expresados mediante transformaciones adecuadas para que tengan un efecto creciente.

Formulando lo anterior, para cada dimensión $d = 1, \dots, N$ construida a partir de indicadores, si denotamos $s_{i,k}$ como la puntuación normalizada del individuo (u hogar) i en el indicador k , entonces el subíndice de la dimensión d para el individuo i se calcula como el promedio de sus puntajes en los m_d indicadores de esa dimensión, con $m_d = |\mathcal{K}_d|$ el número de indicadores de la dimensión d (véase la ecuación (2)):

$$I_{i,d} = \frac{1}{m_d} \sum_{k \in \mathcal{K}_d} s_{i,k} \quad (2)$$

donde $\mathcal{K}_d$ es el conjunto de indicadores de la dimensión d . Por construcción, $I_{i,d} = 100$ indica que el individuo i tiene el máximo nivel de bienestar en la dimensión d (alcanzó el máximo en todos los indicadores correspondientes), mientras que valores más reducidos reflejan bajos niveles de bienestar. Este enfoque —alineado con metodologías de bienestar equivalente en literatura— convierte el vector de privaciones categóricas en un índice de logro continuo por dimensión.

Con los subíndices de dimensión calculados para cada unidad de análisis, se obtiene la distribución de logros de cada dimensión en la población. Cada una de ellas produce así una distribución con valores entre 0 y 100 que describe la heterogeneidad observable en un aspecto específico del bienestar. El procedimiento se repite para toda dimensión construida a partir de diferentes indicadores categóricos y ordinales, de modo que el índice parte de un conjunto de distribuciones marginales comparables entre sí.

Para dimensiones que se construyen a partir de variables continuas y no indicadores binarios u ordinales, se mantienen las unidades y distribuciones de dichas variables, permitiendo la interpretabilidad, replicabilidad y transparencia.

En la formulación general, el índice puede calcularse a nivel individual o de hogar, siempre que las dimensiones se observen de manera consistente para la misma unidad. En la aplicación empírica desarrollada en la sección IV todas las dimensiones son obtenidas a nivel de hogar, por ser la unidad para la que BADEHOG ofrece mayor comparabilidad en el conjunto de variables seleccionadas, siguiendo la metodología de cálculo habitual de la desigualdad por ingreso. Luego, la desigualdad entre la población es obtenida a nivel de individuos. Cuando un indicador proviene de información individual —por ejemplo, escolaridad, condición de actividad laboral o afiliación a la seguridad social— se agrega previamente al hogar mediante reglas explícitas; cuando se trata de un atributo estrictamente doméstico, como hacinamiento o acceso a servicios básicos, se utiliza directamente.

4. Agregación de dimensiones en la unidad de análisis

Se calcula un índice de bienestar compuesto para cada unidad i agregando linealmente sus logros en las distintas dimensiones. Si $I_{i,d}$ representa el subíndice de la dimensión d para la unidad i , el bienestar multidimensional W_i puede expresarse como una suma ponderada (véase la ecuación (3)):

$$W_i = \sum_{d=1}^N c_d I_{i,d} \quad (3)$$

donde $c_d = v_d / \mu_d$, $\sum_{d=1}^N v_d = 1$ y $v_d \geq 0$. El coeficiente v_d representa el peso normativo asignado a la dimensión d en la agregación, de modo que dimensiones consideradas más importantes reciben ponderaciones mayores; la condición de no negatividad y suma unitaria garantiza que $\{v_d\}$ constituya un vector de ponderaciones bien definido.

La variable μ_d corresponde a la media observada de la dimensión d en la población de n unidades, esto es, $\mu_d = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_{i,d}$. Al dividir por μ_d , el bienestar agregado W_i deja de estar expresado en la escala 0–100 de los subíndices dimensionales y pasa a interpretarse como un logro relativo a la media poblacional de cada dimensión. Así, W_i resume la posición relativa de la unidad en el conjunto de dimensiones consideradas: cuanto mayor sea W_i , mayor será su nivel de logro conjunto.

En general, la agregación podría incorporar ponderaciones diferenciales por importancia de dimensiones o usar una función no lineal, como una media geométrica o la elasticidad de sustitución constante (CES). En esta propuesta se opta por la forma lineal, por transparencia y porque Foster y Lokshin (2024) muestran que ella facilita el cumplimiento de propiedades normativas relevantes y una descomposición interpretable del índice final.

Tras este paso, se obtiene una distribución unidimensional del bienestar agregado para la población. El problema de medir la desigualdad multidimensional se reduce entonces a medir la desigualdad de esa distribución sintética, tal como se haría con una variable continua estándar. En otras palabras, el vector de logros multidimensional de cada unidad se resume en un único puntaje y luego se evalúa la dispersión de dichos puntajes en la población.

5. Medición de la desigualdad sobre el bienestar multidimensional

Con la distribución de puntajes de bienestar W_i , se aplica una medida estándar de desigualdad unidimensional para obtener el nivel de desigualdad multidimensional. En este documento se privilegia el coeficiente de Gini, por su interpretabilidad y porque simplifica la descomposición al anular el término estructural S en el marco de la metodología propuesta por Foster y Lokshin (2024). No obstante, el enfoque admite medidas alternativas —como Theil o Atkinson— y, de hecho, un programa de trabajo regional debería explorar la robustez de los resultados ante distintas elecciones normativas.

6. Ventajas y desafíos del Índice de Desigualdad Social Multidimensional (IDM)

Una de las principales ventajas del enfoque propuesto por Foster y Lokshin (2024) es que permite descomponer el índice de desigualdad multidimensional en dos componentes conceptualmente distintos: la desigualdad intra-dimensional y la desigualdad asociada entre dimensiones.

El primer componente, la desigualdad intra-dimensional, corresponde a la contribución de la variabilidad dentro de cada dimensión individual al índice total. En términos intuitivos, estima cuánta desigualdad existiría en el índice de bienestar W si no hubiera correlación entre las dimensiones, es decir, considerando únicamente las disparidades que se observan dentro de cada dimensión por separado. Matemáticamente, puede aproximarse como el promedio ponderado de las desigualdades (por ejemplo, Gini) calculadas sobre cada distribución marginal I_d . Este componente refleja, por ejemplo, el nivel de desigualdad en salud, educación o vivienda considerados de forma aislada.

El segundo componente, la desigualdad asociada entre dimensiones, captura la parte de la desigualdad total que se debe a la forma en que las ventajas y desventajas se combinan entre dimensiones. Este componente mide la dependencia estructural entre logros y privaciones: aumenta cuando ciertas personas tienden a acumular múltiples privaciones mientras otras concentran logros. Si las dimensiones fueran estadísticamente independientes, este componente sería igual a cero —situación conocida como “igualdad compleja”. En cambio, cuando existe una fuerte superposición de menores niveles de bienestar en cada dimensión (es decir, personas que presentan desventajas en varias dimensiones a la vez), este componente se vuelve positivo y eleva el índice total, lo que se conoce como desigualdad multidimensional simple o perfectamente alineada. Este término surge formalmente de la covariación entre logros en diferentes dimensiones al calcular el bienestar agregado W_i .

De forma esquemática, la descomposición puede expresarse como ecuación (4):

$$I_{\text{total}} = I_{d\text{-específico}} - R_{d\text{-solapamiento}} \quad (4)$$

donde $I_{d\text{-específico}}$ representa el promedio ponderado de desigualdades específicas por dimensión, $R_{d\text{-solapamiento}}$ y el exceso o reducción de desigualdad asociado a la correlación entre dimensiones. Foster y Lokshin (2024) demuestran esta descomposición de manera rigurosa.

Desde el punto de vista práctico, esta distinción permite diagnosticar con mayor precisión el origen de la desigualdad. Por ejemplo, Foster y Lokshin (2024) en su aplicación del método a datos de Azerbaiyán entre 2016 y 2023, presentaron que el aumento del IDM se debía tanto al incremento de las brechas dentro de dimensiones como a una mayor concentración simultánea de desventajas en ciertos grupos. Para ilustrarlo, puede considerarse un país donde cada dimensión presenta desigualdad moderada por separado, pero en el que las mismas familias se ubican sistemáticamente en el quintil inferior (o superior) de todas ellas. Esta alineación perfecta genera un valor elevado de $R_{d\text{-solapamiento}}$, lo que refleja

la presencia de “desventajas corrosivas”. Por el contrario, si las posiciones relativas de las personas varían entre dimensiones —por ejemplo, alguien puede estar rezagado en educación, pero bien en salud—, la asociación es baja y el IDM puede incluso ser menor que alguna desigualdad unidimensional.

Para una propuesta regional, esta estrategia de descomposición aporta dos ventajas adicionales, además de la descomponibilidad entre dimensiones:

- i) Simplicidad con fundamento teórico: la agregación lineal con pesos explícitos es conceptualmente clara y se basa en axiomas normativos bien establecidos. La aplicación posterior de una medida como el índice de Gini es un procedimiento familiar en el análisis de desigualdad.
- ii) Flexibilidad para simulaciones y análisis contrafactuales: al trabajar con una función agregada, es posible modelar escenarios hipotéticos, como evaluar el impacto en la desigualdad multidimensional de una mejora en un indicador específico dentro de un subgrupo de la población.

En suma, este enfoque produce un índice de desigualdad multidimensional interpretable, fundado en opciones explícitas sobre dimensiones y pesos, y enriquecido por una descomposición que aclara el rol de las privaciones superpuestas. Ello ofrece a quienes diseñan e implementan política pública una manera de distinguir si la desigualdad está impulsada principalmente por brechas elevadas dentro de ciertos ámbitos o por la concentración simultánea de desventajas entre ámbitos.

IV. Evidencia empírica: medición de la desigualdad social multidimensional en América Latina

Las secciones anteriores de este documento han establecido el marco conceptual, revisado los debates metodológicos y formulado recomendaciones para la construcción de un índice de desigualdad social multidimensional regional. La presente sección presenta los resultados de una aplicación empírica de la metodología propuesta, utilizando datos armonizados de encuestas de hogares de trece países de América Latina. Este ejercicio permite evaluar la viabilidad práctica de las recomendaciones formuladas y, al mismo tiempo, ofrece una primera caracterización de los niveles, la composición y la estructura interna de la desigualdad multidimensional en la región.

A. Fuente de datos y cobertura

El análisis empírico utiliza microdatos de encuestas de hogares armonizadas para trece países latinoamericanos, compilados en el Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) mantenido por la CEPAL. El BADEHOG constituye una infraestructura regional que integra los principales relevamientos nacionales de hogares y aplica procedimientos de armonización para hacer comparables, entre países y a lo largo del tiempo, variables fundamentales como ingreso, composición del hogar, escolaridad, condición de actividad, cotizaciones previsionales y características de la vivienda. Aunque los diseños muestrales originales, los cuestionarios y los calendarios de levantamiento difieren entre países, el proceso de armonización reduce en forma sustantiva las discrepancias conceptuales y operativas que dificultarían la comparación directa.

La cobertura de este trabajo comprende 13 países de América Latina: Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, Honduras, México, el Paraguay, el Perú, la República Dominicana y el Uruguay. El objetivo es representar una sección amplia y diversa de países de la región. La unidad de análisis final son las personas, pero la construcción de indicadores es a partir de los hogares. Cada individuo dispone, por tanto, de un conjunto de atributos observados o contruidos que describen su posición relativa en las dimensiones seleccionadas.

Los resultados definitivos se basan en el último levantamiento armonizado y comparable disponible para cada país, construyendo un escenario base regional en torno a 2023. En concreto, los datos corresponden a 2023 para la Argentina, el Brasil, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, el Paraguay, el Perú, la República Dominicana y el Uruguay; a 2022 para Chile y México; a 2021 para el Estado Plurinacional de Bolivia; y a 2019 para Honduras. Esta diferencia temporal entre países responde a la disponibilidad efectiva de datos en BADEHOG.

Esto tiene dos ventajas. Primero, maximiza la cobertura geográfica disponible sin sacrificar comparabilidad conceptual entre variables. Segundo, permite ofrecer un diagnóstico actualizado de la estructura de la desigualdad multidimensional en la región utilizando la mejor información comparable disponible. Su principal limitación es que el escenario base no corresponde a un único año calendario para todos los países; en particular, la inclusión de Honduras con datos de 2019 aconseja interpretar las comparaciones como órdenes de magnitud relativos y no como fotografía estrictamente simultánea. Aun con esta salvedad, BADEHOG ofrece la base más robusta actualmente disponible para un ejercicio regional de este tipo.

B. Dimensiones y variables

En línea con la literatura sobre pobreza y desigualdad multidimensional, y con las prioridades analíticas de la CEPAL, se consideraron cinco dimensiones del bienestar: i) ingreso, ii) educación, iii) determinantes y seguro de salud, iv) hacinamiento, y v) empleo y pensiones. La selección obedece a un criterio doble: relevancia sustantiva y comparabilidad empírica. Se privilegian dimensiones con importancia directa para el bienestar de los hogares y con indicadores disponibles de manera suficientemente homogénea en los 13 países incluidos. A continuación, se describe la operacionalización de cada una de ellas.

1. Ingreso

La dimensión de ingreso se aproxima mediante el ingreso per cápita del hogar, definido como el ingreso total del hogar—incluyendo remuneraciones, ingresos por trabajo independiente, pensiones, transferencias y otras fuentes monetarias— dividido por el número de integrantes. Se trata de la medida estándar de recursos monetarios disponibles por persona y permite capturar diferencias de bienestar material ajustadas por tamaño del hogar, sin aplicar escalas de equivalencia. El uso del ingreso per cápita es consistente con la práctica habitual en análisis de pobreza absoluta y desigualdad en la región. En el BADEHOG, los ingresos se encuentran armonizados conforme a los procedimientos de la CEPAL, de modo que la comparación entre países y años resulte analíticamente consistente dentro de las limitaciones propias de cada fuente nacional.

2. Educación

Para aproximar la dimensión educativa se utilizó un indicador de cumplimiento o logro escolar a nivel de hogar. Este indicador se construye comparando, para cada miembro del hogar, los años efectivamente aprobados con los años “esperables” dados su edad y el umbral educativo considerado. Luego se agregan los resultados a nivel del hogar como la razón entre el total de años completados respecto al años potenciales. La ventaja de esta medida frente al simple promedio de años de estudio es que incorpora la estructura etaria del hogar y distingue entre rezago educativo y trayectorias acordes a la edad. Un valor elevado indica que los miembros del hogar se encuentran, en promedio, más cerca de completar los niveles educativos esperados; un valor bajo sugiere atrasos más marcados y, por tanto, menor acumulación de capital humano.

3. Salud

Esta dimensión integra determinantes de la salud y el acceso a un esquema de aseguramiento para los miembros del hogar. En específico, se compone de tres elementos que combinan condiciones materiales básicas para la salud y cobertura formal. Los dos primeros se miden a nivel del hogar y corresponden al acceso a agua potable en la vivienda y al acceso a saneamiento. El tercero recoge la proporción de integrantes del hogar que cuentan con algún tipo de aseguramiento o cobertura de salud. Cada subcomponente recibe un tercio del peso dentro de la dimensión. De esta forma, la medida no capta directamente resultados clínicos ni estados de salud, ni tampoco incorpora el acceso efectivo a los servicios, dado que la cobertura suele ser relativamente alta, mientras que las principales brechas se observan en el acceso. No obstante, sí logra capturar dimensiones preventivas y de protección particularmente relevantes en contextos latinoamericanos, como la disponibilidad de servicios básicos y la cobertura frente a riesgos sanitarios y financieros.

4. Hacinamiento

Como proxy de las condiciones habitacionales se utilizó una medida de densidad del espacio residencial, definida a partir de la relación entre el número de dormitorios y el número de integrantes del hogar. Un valor mayor indica menor hacinamiento y, en consecuencia, mejores condiciones de habitabilidad. Este indicador resume un aspecto central de la calidad de la vivienda que es ampliamente comparable entre encuestas y que se asocia a resultados en salud, seguridad y bienestar subjetivo. Si bien la vivienda es claramente una dimensión más compleja —materialidad, acceso a servicios, tenencia, localización—, el hacinamiento permite capturar de manera parsimoniosa y regionalmente consistente un componente fundamental de esa complejidad.

5. Empleo y pensiones

Esta dimensión evalúa la inclusión laboral, es decir, la calidad de la inserción laboral y de la protección contributiva de los hogares. Integra tres subdimensiones con igual ponderación: i) suficiencia del ingreso laboral o previsional respecto de un umbral mínimo; ii) condiciones laborales y contributivas, incluyendo cotización al sistema previsional o recepción de pensión en edades pertinentes y ausencia de jornadas excesivas; y iii) estabilidad o calidad del empleo, aproximada mediante la clasificación de baja productividad utilizada por la CEPAL y vinculada a la literatura sobre calidad del empleo en América Latina (Sehnbruch et al., 2020). Se construye el indicador a nivel de personas, obteniendo un promedio para el hogar que es idéntico para todos los integrantes. En hogares con pensionados pero sin ocupados, la construcción se adapta para preservar la comparabilidad conceptual. Esta dimensión es especialmente importante en el contexto regional, donde una parte sustantiva de la desigualdad se produce a través de mercados laborales segmentados y de coberturas de sistemas de pensiones contributivas desiguales.

En conjunto, estas cinco variables permiten aproximar dimensiones centrales del bienestar que van más allá del ingreso e incorporan tanto logros acumulados como condiciones de reproducción cotidiana (véase el cuadro 2). Todas ellas se encuentran medidas a nivel de hogar, ya sea porque son intrínsecamente atributos del hogar (o la vivienda) o porque se agregan desde información individual contenida en las encuestas. Esta decisión es coherente con la evidencia que subraya que buena parte de las oportunidades y restricciones se generan y se experimentan dentro de unidades domésticas concretas.

Vale la pena notar que, aun con las limitaciones de datos, la especificación empírica incorpora dimensiones centrales del bienestar y mantiene la lógica sustantiva de la propuesta normativa. No obstante, no agota el horizonte conceptual presentado en la sección III. Esta distinción es clave para interpretar los resultados que siguen como una prueba de factibilidad y no como la versión definitiva del IDM.

Cuadro 2
Dimensiones, indicadores y fuentes de la implementación empírica

Dimensión	Indicador o variable	Qué captura
Ingreso	Ingreso per cápita del hogar	Sintetiza acceso monetario a recursos e integra ingresos laborales, transferencias y pensiones armonizadas.
Educación	Cumplimiento escolar del hogar	Mide la escolaridad efectivamente completada respecto del máximo esperable según edad de los miembros del hogar.
Vivienda	Dormitorios por persona	Aproxima hacinamiento y calidad del espacio habitacional en una métrica simple y robusta.
Salud	Agua, saneamiento y seguro de salud ^a	Índice compuesto de acceso a determinantes básicos y cobertura sanitaria.
Empleo y pensiones	Ingresos laborales o pensionarios, contribución y calidad del empleo	Sintetiza suficiencia de ingresos, inserción formal y estabilidad laboral.

Fuente: Elaboración propia.

^a Brasil solo incluye acceso a agua y saneamiento.

C. Ponderaciones normativas

Siguiendo la metodología discutida, deben asignarse ponderaciones normativas a las dimensiones seleccionadas. Para este estudio, se adopta un esquema de ponderación simple que otorga un 50% de peso al ingreso y un 12,5% a cada una de las cuatro dimensiones restantes: educación, vivienda, salud, y empleo y pensiones.

En forma vectorial (ecuación (5)),

$$\mathbf{v} = (v_{\text{Ingreso}}, v_{\text{Educación}}, v_{\text{Vivienda}}, v_{\text{Salud}}, v_{\text{Empleo}}), y \quad (5)$$

$$\mathbf{v} = (0.50; 0.125; 0.125; 0.125; 0.125).$$

La elección es explícitamente normativa. No se deriva de los datos, sino de un juicio sobre la relevancia relativa de cada dominio del bienestar en una medida sintética de desigualdad. El esquema también resulta fácil de comunicar: la mitad del índice depende de la distribución de los recursos monetarios y la otra mitad de dimensiones sociales y de condiciones de vida. Otros vectores de ponderación serían posibles y podrían explorarse en ejercicios de sensibilidad; sin embargo, el patrón adoptado aquí ofrece un punto de partida razonable y fácil de explicar para una primera medición regional.

D. Resultados

1. Resultados para el escenario base regional (en torno a 2023)

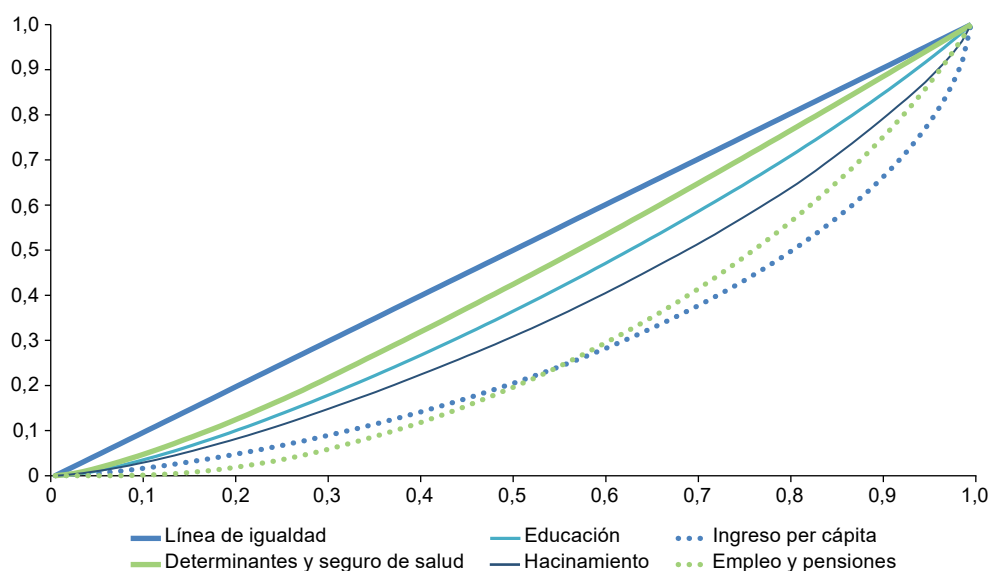
Esta sección presenta los resultados empíricos de la medición de desigualdad multidimensional para los 13 países incluidos en la muestra, utilizando el último levantamiento armonizado disponible en cada caso. Se reportan, primero, la desigualdad de cada dimensión por separado y las curvas de Lorenz promedio regionales; luego, la desigualdad multidimensional observada del índice agregado y su contraparte máxima posible bajo ordenamiento comonótono⁵. La diferencia entre ambas permite evaluar cuánto se reduce la desigualdad total debido a la no alineación entre dimensiones.

En todos los casos, las cifras regionales corresponden a promedios simples de los 13 países considerados. El análisis no pretende reemplazar la lectura de cada distribución nacional, sino ofrecer una referencia sintética que permita comparar configuraciones distributivas y mostrar cómo la información conjunta de las dimensiones modifica la lectura basada únicamente en el ingreso.

⁵ Ordenamiento en que las dimensiones se alinean plenamente entre sí, de modo que las personas con mayores dotaciones en una dimensión también las presentan en las demás, y lo mismo ocurre con quienes registran menores dotaciones.

El gráfico 1 ilustra las curvas de Lorenz promedio simple para cada una de las cinco dimensiones. La comparación con la diagonal de igualdad muestra con claridad que las distribuciones más desiguales corresponden, en promedio, al ingreso per cápita y a empleo y pensiones. En ambos casos, la curvatura es más pronunciada que en el resto de las dimensiones, lo que indica una mayor concentración de los logros en los hogares ubicados en la parte superior de la distribución. En el otro extremo, las curvas de educación y de salud se sitúan más cerca de la línea de igualdad, señal de una desigualdad comparativamente menor. Hacinamiento ocupa una posición intermedia.

Gráfico 1
América Latina (13 países): curvas de Lorenz promedio por dimensión de desigualdad, alrededor de 2023

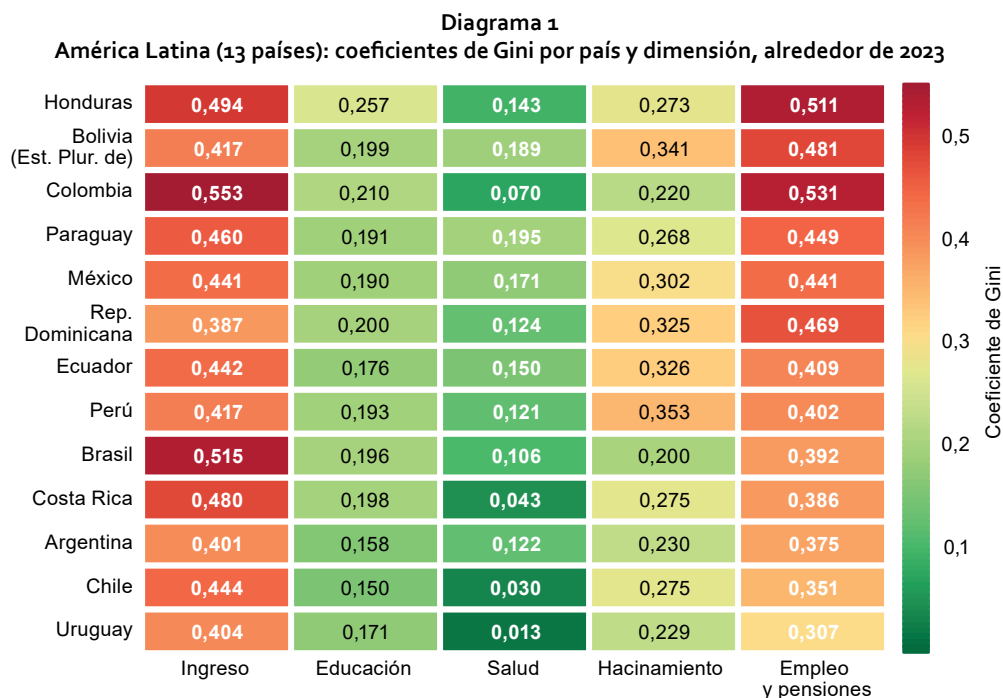


Fuente: Elaboración propia sobre la base de BADEHOG (CEPAL).

Nota: Promedio simple. América Latina incluye a Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Los datos corresponden a 2023 para Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay; a 2022 para Chile y México; a 2021 para Bolivia (Estado Plurinacional de); y a 2019 para Honduras.

Mirado en conjunto, el patrón dimensional sugiere una estructura distributiva donde las brechas asociadas al mercado —ingresos y calidad del empleo— siguen siendo el núcleo más duro de la desigualdad regional, mientras que las dimensiones de acumulación de capacidades y de acceso a condiciones básicas de salud presentan, en promedio, una distribución menos concentrada. Esto no significa que educación o salud dejen de ser decisivas para el bienestar; más bien indica que, con la operacionalización utilizada aquí, las dispersiones relativas son menores que en las dimensiones estrictamente monetarias y laborales. Desde un punto de vista de política, esta distinción sugiere que la desigualdad multidimensional no se reducirá de forma sustantiva sin intervenciones que alteren la estructura de los ingresos y la segmentación del empleo, aun cuando las mejoras en educación, vivienda y salud sigan siendo indispensables tanto para evitar la reproducción intergeneracional de desventajas como la promoción de la movilidad social.

El diagrama 1 confirma esta jerarquía con coeficientes de Gini por país y dimensión. En promedio simple, el Gini del ingreso per cápita alcanza 0,450 y el de empleo y pensiones 0,423, muy por encima de los valores promedio de hacinamiento (0,278), educación (0,192) y determinantes y seguro de salud (0,114). Esta configuración sugiere que, en la región, los principales focos de dispersión siguen estando ligados a la distribución de recursos monetarios y a la inserción laboral y previsional. Las otras dimensiones no son irrelevantes, pero su aporte promedio a la desigualdad específica es menor.



Fuente: Elaboración propia sobre la base de BADEHOG (CEPAL).

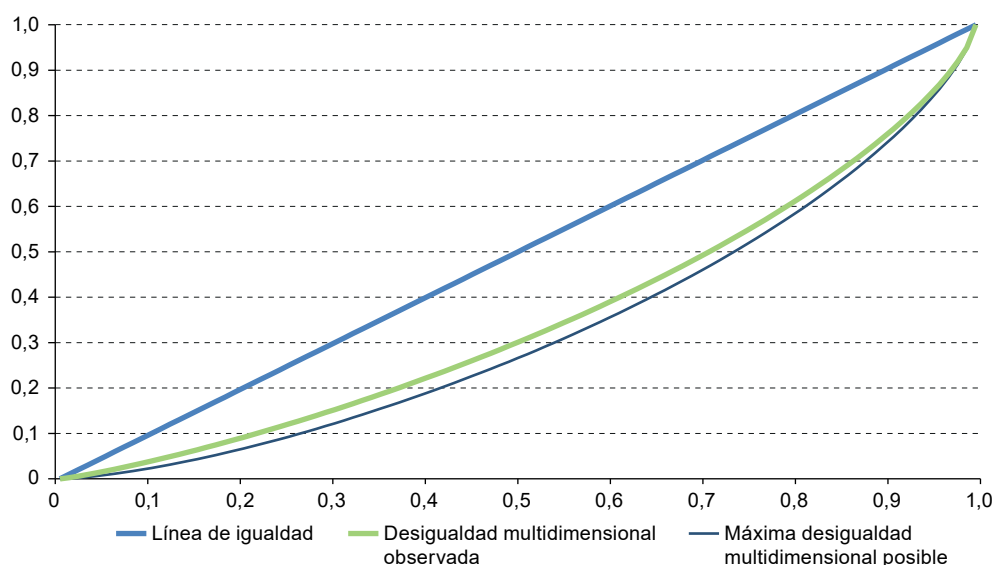
Nota: Los datos corresponden a 2023 para Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay; a 2022 para Chile y México; a 2021 para Bolivia (Estado Plurinacional de); y a 2019 para Honduras.

Las diferencias entre países son, sin embargo, marcadas. En ingreso per cápita, Colombia (0,553) y el Brasil (0,515) registran los niveles más altos de desigualdad, mientras que la República Dominicana (0,387), la Argentina (0,401) y el Uruguay (0,404) se ubican en el extremo inferior. En educación, Honduras destaca claramente con el mayor Gini (0,257), seguido por Colombia (0,210), la República Dominicana (0,200), Bolivia (Estado Plurinacional de) (0,199) y el Brasil (0,196); en el extremo opuesto se encuentran Chile (0,150), la Argentina (0,158) y el Uruguay (0,171). En la dimensión salud, los mayores niveles de desigualdad corresponden a el Paraguay (0,195), Bolivia (Estado Plurinacional de) (0,189) y México (0,171), mientras que el Uruguay (0,013), Chile (0,030) y Costa Rica (0,043) presentan distribuciones mucho más igualitarias.

En hacinamiento, el Perú (0,353) y Bolivia (Estado Plurinacional de) (0,341) muestran los valores más altos, seguidos del Ecuador (0,326) y la República Dominicana (0,325), lo que revela una dispersión importante en la adecuación del espacio habitacional. El Brasil (0,200), Colombia (0,220) y el Uruguay (0,229) presentan los menores niveles de desigualdad en esta dimensión. Por último, en empleo y pensiones destacan Colombia (0,531) y Honduras (0,511) seguidos del Estado Plurinacional de Bolivia (0,481), la República Dominicana (0,469) y el Paraguay (0,449). El Uruguay (0,307), Chile (0,351) y la Argentina (0,375) se ubican en el extremo opuesto. En conjunto, estas diferencias muestran que la desigualdad multidimensional no emerge de una única combinación de brechas: países con niveles semejantes de desigualdad agregada pueden llegar a ella por trayectorias dimensionales muy distintas.

El gráfico 2 compara la curva de Lorenz promedio de la desigualdad multidimensional observada con la correspondiente a la desigualdad máxima posible, es decir, un escenario en que las personas ocupen exactamente el mismo orden en todas las dimensiones, de modo que las desventajas y ventajas se acumulan en los mismos individuos. La curva de la máxima desigualdad multidimensional posible se ubica de manera sistemática por debajo de la observada, lo que confirma que, aun manteniendo fijas las desigualdades marginales de las dimensiones, la no alineación entre ellas reduce la desigualdad agregada respecto del escenario hipotético en que todas las desventajas se superponen perfectamente. Dicho de otro modo, la estructura conjunta de los logros atenúa —al menos parcialmente— la concentración del bienestar compuesto.

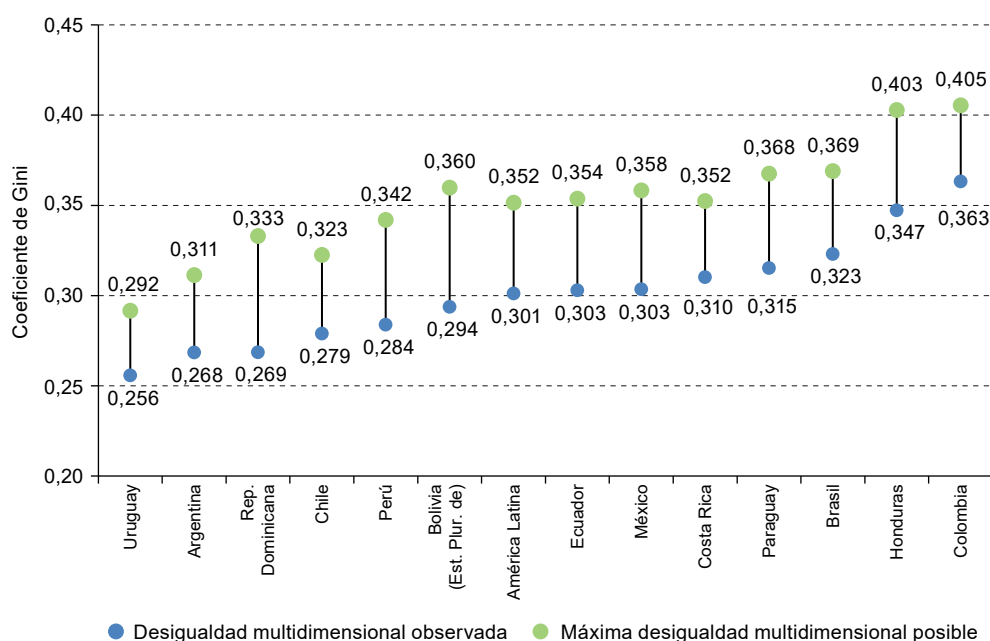
Gráfico 2
América Latina (13 países): curvas de Lorenz para desigualdad multidimensional observada y máxima posible, alrededor de 2023



Fuente: Elaboración propia sobre la base de BADEHOG (CEPAL).

Nota: Promedio simple. América Latina incluye a Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Los datos corresponden a 2023 para Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay; a 2022 para Chile y México; a 2021 para Bolivia (Estado Plurinacional de); y a 2019 para Honduras.

Gráfico 3
América Latina (13 países): desigualdad multidimensional observada y máxima posible por país, alrededor de 2023



Fuente: Elaboración propia sobre la base de BADEHOG (CEPAL).

Nota: Los datos corresponden a 2023 para Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay; a 2022 para Chile y México; a 2021 para Bolivia (Estado Plurinacional de); y a 2019 para Honduras.

El gráfico 3 permite visualizar simultáneamente el nivel de desigualdad observada, la desigualdad máxima posible y la distancia entre ambas para cada país. El coeficiente de Gini de la desigualdad multidimensional observada varía entre 0,256 en el Uruguay y 0,363 en Colombia. Por encima del promedio regional (0,301) se sitúan, además de Colombia, Honduras (0,347), el Brasil (0,323), el Paraguay (0,315), Costa Rica (0,310), México (0,303) y el Ecuador (0,303). En el extremo inferior aparecen la Argentina (0,268), la República Dominicana (0,269), Chile (0,279) y el Perú (0,284). La desigualdad máxima posible replica en buena medida este ordenamiento, con un rango que va de 0,292 en el Uruguay a 0,405 en Colombia y un promedio regional de 0,405. La brecha entre ambas magnitudes equivale, en promedio, a 0,050 puntos de Gini. Expresada como proporción de la desigualdad máxima posible, esta reducción alcanza 14,3% para el promedio regional.

La amplitud de la brecha ofrece una lectura sustantiva sobre la estructura de la desigualdad. Las mayores reducciones relativas asociadas a la no alineación se observan en la República Dominicana (19,3%), el Estado Plurinacional de Bolivia (18,4%), el Perú (17,0%) y México (15,3%). En estos países, las desventajas en ingreso, educación, salud, vivienda y empleo/pensiones no recaen completamente sobre los mismos hogares, por lo que la agregación multidimensional genera un grado relevante de compensación entre dimensiones. En el extremo opuesto, Colombia (10,4%), Costa Rica (12,0%), el Uruguay (12,3%), el Brasil (12,5%), la Argentina (13,8%), Honduras (13,8%) y muestran brechas más acotadas entre la desigualdad observada y la máxima posible. Cuando esta menor brecha coincide con altos niveles de desigualdad agregada —como ocurre con claridad en Colombia y el Brasil— la evidencia es consistente con una mayor acumulación de desventajas en los mismos hogares. En países de menor desigualdad general, como el Uruguay, una brecha reducida también puede reflejar que las desigualdades marginales son más bajas y dejan menos espacio para que la no alineación modere el índice agregado. En consecuencia, el valor analítico de la brecha depende siempre de su lectura conjunta con el nivel de desigualdad observado.

En síntesis, el nivel de desigualdad multidimensional y su estructura no son equivalentes. Países con valores relativamente próximos del Gini multidimensional pueden presentar configuraciones muy distintas en términos de concentración o dispersión conjunta de las desventajas. Por eso, una lectura regional informada requiere considerar tanto la magnitud del índice como el margen de reducción asociado a la no alineación entre dimensiones.

2. Lectura comparada de perfiles nacionales

Una forma útil de leer los resultados es distinguir tres tipos de configuraciones nacionales. En un primer grupo se ubican países con desigualdad multidimensional observada alta y brecha relativamente pequeña respecto de la máxima posible. Colombia es el caso más nítido y el Brasil comparte rasgos importantes de esta configuración. En estos contextos, no sólo son elevadas las desigualdades específicas en ingreso y empleo/pensiones, sino que además la no alineación entre dimensiones modera poco el índice agregado. La lectura distributiva más plausible es la de una estratificación más compacta: quienes están rezagados en una dimensión tienden con mayor frecuencia a estarlo también en otras. Desde la política pública, ello apunta a la necesidad de intervenciones integrales y coordinadas, con fuerte focalización territorial y de hogares, más que a mejoras sectoriales desconectadas entre sí.

Un segundo grupo reúne países con desigualdad observada intermedia-alta, pero con márgenes de reducción por no alineación más amplios. El Estado Plurinacional de Bolivia, Honduras, México, y el Perú ilustran este patrón con distintos matices. En ellos, las desigualdades específicas siguen siendo relevantes, pero la distribución conjunta de desventajas es menos compacta que en el grupo anterior. Esto puede obedecer a combinaciones heterogéneas de rezagos: por ejemplo, hogares con fuertes déficits laborales y monetarios que no coinciden plenamente con los hogares más rezagados en vivienda o educación, o viceversa. En estos casos, las políticas sectoriales todavía tienen margen para producir mejoras significativas en dominios concretos, siempre que se preserve una capacidad de coordinación que evite la recomposición de nuevas desigualdades entre dimensiones.

Un tercer grupo comprende países con desigualdad multidimensional relativamente baja en comparación regional, como el Uruguay, la Argentina, Chile y, en la medición observada, también la República Dominicana. Aquí el diagnóstico no debe ser interpretado como ausencia de problemas distributivos. Más bien sugiere que, dadas las dimensiones incluidas y las ponderaciones adoptadas, la dispersión total del bienestar compuesto es menor que en el resto de la región. Aun así, persisten diferencias relevantes por dimensión —por ejemplo, en empleo y pensiones o en hacinamiento— y, en algunos casos, una brecha acotada entre desigualdad observada y máxima posible recuerda que las privaciones remanentes pueden seguir concentrándose en subconjuntos específicos de hogares. En otras palabras, menores niveles agregados no eliminan la necesidad de políticas preventivas y de seguimiento fino de la acumulación de desventajas.

Estas tipologías son necesariamente exploratorias y no sustituyen un análisis nacional más detallado. Su utilidad reside en mostrar que la comparación regional gana en densidad y profundidad cuando se consideran simultáneamente el nivel de desigualdad multidimensional, la composición por dimensiones y el papel del solapamiento. Para futuras investigaciones, una extensión natural consistiría en profundizar esta lectura mediante desagregaciones por sexo, edad, etnicidad, área de residencia o estrato socioeconómico, de manera de identificar con mayor precisión qué grupos concentran combinaciones particulares de privaciones.

V. Reflexiones finales y agenda futura

Los resultados de este documento deben interpretarse en el marco de los desafíos estructurales que enfrenta América Latina, particularmente las trampas del desarrollo identificadas por la CEPAL. Entre ellas, la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social ocupa un lugar central, en tanto condiciona y es condicionada por la dinámica del desarrollo en la región. En este contexto, este documento es pionero en aplicar una nueva metodología para la construcción de un índice de desigualdad multidimensional y su aplicación a países de América Latina. La evidencia presentada sobre desigualdad social multidimensional muestra que las brechas en distintas dimensiones del bienestar no solo persisten, sino que tienden a superponerse y reforzarse mutuamente, configurando mecanismos de acumulación de desventajas que limitan las oportunidades a lo largo del ciclo de vida.

Este hallazgo tiene implicancias directas para la política pública. En particular, refuerza la idea de que intervenciones sectoriales aisladas —aunque necesarias— serían insuficientes para abordar un fenómeno cuya naturaleza es simultáneamente multidimensional, acumulativa e interdependiente. La evidencia sugiere que allí donde las desventajas se concentran en los mismos hogares y territorios, la fragmentación institucional tendería a reducir la eficacia redistributiva de la política pública. En este contexto, avanzar hacia un diseño e implementación de políticas públicas integrales —articulando empleo, protección social, educación, salud y vivienda— no solo sería deseable, sino imprescindible para reducir la desigualdad, rompiendo dinámicas persistentes de exclusión y acumulación de desventajas.

Desde una perspectiva más amplia, estos resultados dialogan directamente con las estrategias de desarrollo de la región. En particular, refuerzan la centralidad del enfoque de desarrollo social inclusivo promovido por la CEPAL, que sitúa la reducción de la desigualdad como un eje central del desarrollo. La evidencia sugiere que no sería posible avanzar hacia trayectorias de crecimiento sostenido ni fortalecer la cohesión social sin reducir la desigualdad abordando de manera simultánea las múltiples dimensiones del bienestar y las brechas que afectan a los grupos más rezagados. En este sentido, la integralidad de las políticas públicas no solo mejoraría la efectividad de la acción pública, sino que constituiría un componente esencial de una estrategia de desarrollo que articule lo social, lo productivo y lo institucional.

Uno de los principales aportes de este documento es contar con una medida de desigualdad social multidimensional que, entre otros factores, permitiría mejorar la capacidad de diagnóstico de los Estados, al identificar no solo dónde están las brechas, sino cómo estas se combinan y afectan a los mismos grupos poblacionales. Esta información es fundamental para orientar la asignación de recursos, priorizar intervenciones y fortalecer la coordinación intersectorial, contribuyendo así al diseño e implementación de políticas públicas más coherentes y efectivas para avanzar en la reducción de la desigualdad en la región.

En este contexto, la dimensión metodológica adquiere un rol central. La elección de una metodología de medición no es un aspecto meramente técnico, sino una decisión con implicancias normativas y de política pública. El enfoque adoptado en este documento —basado en el marco de Foster y Lokshin (2024)— permitiría avanzar en esta dirección, al ofrecer una herramienta que es, al mismo tiempo, conceptualmente consistente, metodológicamente transparente y operativamente viable para la región. En particular, su capacidad para capturar la asociación entre dimensiones —es decir, la superposición de desventajas— constituye un avance sustantivo respecto de enfoques que analizan las brechas de manera independiente.

Asimismo, la distinción entre un índice con vocación normativa y una aplicación empírica adaptada a las restricciones de información refleja una decisión pragmática y de aplicación efectiva: avanzar en la medición en función de las condiciones disponibles, sin renunciar a un marco conceptual claro sobre el horizonte al que se busca converger. Esta aproximación permitiría que la metodología no solo sea analíticamente robusta, sino también útil para la toma de decisiones en contextos reales, donde las limitaciones de datos son una restricción permanente.

No obstante, estos avances deben leerse a la luz de ciertas limitaciones que, más que debilitar la propuesta, permiten delinear una agenda futura de trabajo. En particular, la aplicación empírica presentada se basa en información transversal y en las restricciones actuales de comparabilidad de las fuentes de datos, lo que limita el análisis dinámico y la incorporación de dimensiones adicionales del bienestar. Asimismo, la operacionalización de algunas dimensiones mediante proxies y la necesidad de armonizar información entre países implican compromisos que deben ser explícitamente considerados en la interpretación de los resultados.

En este sentido, una agenda futura implicaría avanzar en el fortalecimiento de los sistemas estadísticos y en la generación de datos más integrados, comparables y periódicos, que permitan profundizar el análisis multidimensional de la desigualdad. Del mismo modo, sería relevante explorar la sensibilidad de los resultados a distintas decisiones metodológicas, ampliar la cobertura de dimensiones —incluyendo ámbitos como cuidados, seguridad, participación o calidad del entorno— y profundizar el análisis de las desigualdades entre grupos poblacionales, en línea con lo que ha propuesto la CEPAL (CEPAL, 2016 y 2024).

Para los responsables de la formulación de políticas públicas, esto podría implicar contar con una herramienta técnica de medición que puede transformarse en una nueva brújula para la acción pública. Una medida de desigualdad social multidimensional bien diseñada no sustituiría a los indicadores tradicionales, sino que los complementaría, permitiendo una lectura más cercana a la complejidad del problema. En particular, facilitaría la identificación de grupos en situación de desventaja estructural, el monitoreo de avances en múltiples dimensiones y la evaluación de políticas públicas integrales orientadas a reducir la desigualdad.

Al mismo tiempo, este enfoque tiene el potencial de abrir una agenda estratégica de investigación, que promueva políticas públicas integrales y de fortalecimiento institucional destinado a reducir la desigualdad. Por una parte, pondría de relieve la necesidad de avanzar hacia sistemas estadísticos más integrados, comparables y periódicos, que permitan monitorear la desigualdad en el tiempo y entre países. Por otra, plantearía el desafío de traducir estos avances metodológicos en instrumentos concretos de gestión pública, incorporando la medición multidimensional en los procesos de planificación, seguimiento y evaluación de políticas sociales y productivas.

En suma, este documento propone no solo una forma de medir la desigualdad, sino que reafirma la necesidad de entenderla y abordarla de una manera integral, que considere sus distintas dimensiones. En un contexto regional marcado por la persistencia de brechas estructurales, avanzar hacia mediciones multidimensionales —como la aquí propuesta— constituye un paso necesario para alinear el diagnóstico con la naturaleza del problema y, con ello, fortalecer la capacidad de los Estados para diseñar e implementar políticas públicas integrales, efectivas y orientadas a la reducción de la desigualdad, en el marco de estrategias de desarrollo social inclusivo.

Bibliografía

- Aaberge, R., y Brandolini, A. (2015). *Multidimensional poverty and inequality*. In *Handbook of income distribution* (pp. 141–216). Elsevier.
- Adger, W. N. (2006). Vulnerability. *Global Environmental Change*, 16(3), 268–281.
- Alberti, V., Banys, K., Caperna, G., Del Sorbo, M., Fregoni, M., Havari, E., Kovacic, M., Lapatinas, A., Litina, A., Montalto, V., Tacao Moura, C. J., Neher, F., Panella, F., Peragine, V., Pisoni, E., Stuhler, J., Symeonidis, K., Verzillo, S. y Boldrini, M. (2021). *Monitoring Multidimensional Inequalities in the European Union*. Publications Office of the European Union.
- Anand, S., y Sen, A. (1993). *Human development index: Methodology and measurement*. United Nations Development Programme.
- Atkinson, A. B., y Bourguignon, F. (1982). The comparison of multi-dimensioned distributions of economic status. *The Review of Economic Studies*, 49(2), 183–201.
- Bancalari, A., Berlinski, S., Buitrago, G., García, M. F., de la Mata, D., y Vera-Hernández, M. (2025). Health inequalities in Latin America and the Caribbean: Child, adolescent, reproductive, metabolic syndrome and mental health. *Oxford Open Economics*, 4(Suppl. 1), i77–i121.
- Bárcena, A., y Prado, A. (2016). *El imperativo de la igualdad: Por un desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Bosmans, K., Decancq, K., y Ooghe, E. (2015). What do normative indices of multidimensional inequality really measure? *Journal of Public Economics*, 130, 94–104.
- Brain, I., y Prieto, J. (2021). Understanding changes in the geography of opportunity over time: The case of Santiago, Chile. *Cities*, 114, 103186.
- Brunori, P., Ferreira, F. H. G., y Neidhöfer, G. (2025). Inequality of opportunity and intergenerational persistence in Latin America. *Oxford Open Economics*, 4(Suppl. 1), i167–i199.
- Calia, P. P., y Ferrante, M. R. (2024). Multidimensional quantitative indicators. In *Global handbook of inequality* (pp. 1–23). Springer International Publishing.
- Carranza, R., De Rosa, M., y Flores, I. (2025). Wealth inequality in Latin America (2000–2020): Data, facts and conjectures. *Oxford Open Economics*, 4(Suppl. 1), i36–i54.
- Colussi, C., Stafuza, M., Nepote, M., y Mendicino, D. (2022). Seroprevalence of Chagas disease in urban and rural indigenous populations of the south of Gran Chaco. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*, 55, e0479-2021.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2014). *Pactos para la igualdad: Hacia un futuro sostenible*.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2016a). *La matriz de la desigualdad social en América Latina*.

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2016b). *Desarrollo social inclusivo: Una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe*.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2018). *La ineficiencia de la desigualdad*.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). *Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022: La transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible*.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2023). *Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023: La inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo*.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2024a). *La trampa de alta desigualdad y baja movilidad social en América Latina y el Caribe: Un obstáculo para el desarrollo social inclusivo y sostenible*.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2024b). *Reducir la desigualdad y avanzar hacia el desarrollo social inclusivo en América Latina y el Caribe: Desafíos, prioridades y mensajes de cara a la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social*.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2025a). *Índice de pobreza multidimensional para América Latina*.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2025b). *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2024 = Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 2024*.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine. *University of Chicago Legal Forum*, 1989, 139–167.
- Dannefer, D. (2003). Cumulative advantage/disadvantage and the life course: Cross-fertilizing age and social science theory. *The Journals of Gerontology: Series B*, 58(6), S327–S337.
- Decancq, K. (2014). Copula-based measurement of dependence between dimensions of well-being. *Oxford Economic Papers*, 66(3), 681–701.
- Decancq, K. (2020). Measuring cumulative deprivation and affluence based on the diagonal dependence diagram. *METRON*, 78(2), 103–117.
- Decancq, K. (2023). Cumulative deprivation: Identification and aggregation. In *Research handbook on poverty and inequality* (pp. 52–67). Edward Elgar Publishing.
- Decancq, K., y Lugo, M. A. (2012). Inequality of wellbeing: A multidimensional approach. *Economica*, 79(316), 721–746.
- Deneulin, S., y Shahani, L. (Eds.). (2009). *An introduction to the human development and capability approach: Freedom and agency*. Routledge.
- Dhongde, S., Pattanaik, P. K., y Xu, Y. (2024). Inequality in multidimensional well-being in the United States. *Review of Income and Wealth*, 70(3), 820–839.
- Elder, G. H. (1998). The life course as developmental theory. *Child Development*, 69(1), 1–12.
- Erikson, R. (1989). Descriptions of inequality: The Swedish approach to welfare research. World Institute for Development Economic Research (UNU-WIDER).
- Espejo, A. (2022). *Informalidad laboral en América Latina: propuesta metodológica para su identificación a nivel subnacional* (LC/TS.2022/6). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Fisher, F. M. (1956). Income distribution, value judgments, and welfare. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(3), 380–424.
- Fleurbaey, M. (2009). Beyond GDP: The quest for a measure of social welfare. *Journal of Economic Literature*, 47(4), 1029–1075.
- Foster, J. E., Lopez-Calva, L. F., y Szekely, M. (2005). Measuring the distribution of human development: Methodology and an application to Mexico. *Journal of Human Development*, 6(1), 5–25.
- Foster, J. E., y Lokshin, M. M. (2024). Multidimensional and specific inequalities. *World Bank Policy Research Working Paper* 10748.
- Foster, J. E., y Shneyerov, A. A. (2000). Path independent inequality measures. *Journal of Economic Theory*, 91(2), 199–222.
- Gajdos, T., y Weymark, J. A. (2005). Multidimensional generalized Gini indices. *Economic Theory*, 26(3), 471–496.
- Hambleton, I. R., Caixeta, R., Jeyaseelan, S. M., Luciani, S., y Hennis, A. J. M. (2023). The rising burden of non-communicable diseases in the Americas and the impact of population aging: A secondary analysis of available data. *Lancet Regional Health - Americas*, 21, 100483.
- Heckman, J. J. (2006). Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children. *Science*, 312(5782), 1900–1902.

- Hicks, D. A. (1997). The inequality-adjusted human development index: A constructive proposal. *World Development*, 25(8), 1283–1298.
- Huepe, M., Palma, A., y Trucco, D. (2022). *Educación en tiempos de pandemia: una oportunidad para transformar los sistemas educativos en América Latina y el Caribe*, Serie Políticas Sociales (243) (LC/TS.2022/149). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Inter-American Development Bank. (2024). *Better job index: Quality of employment in Latin America, between informality and insufficient wages*.
- Jiwani, S. S., Carrillo-Larco, R. M., Hernández-Vásquez, A., Barrientos-Gutiérrez, T., Basto-Abreu, A., Gutierrez, L., Irazola, V., Nieto-Martínez, R., Nunes, B. P., Parra, D. C. y Miranda, J. J. (2019). The shift of obesity burden by socioeconomic status between 1998 and 2017 in Latin America and the Caribbean: A cross-sectional series study. *The Lancet Global Health*, 7(12), e1644–e1654.
- Kolm, S.-C. (1977). Multidimensional egalitarianisms. *The Quarterly Journal of Economics*, 91(1), 1–13.
- Latin America and Caribbean Regional Task Force for the Reduction of Maternal Mortality. (2017, December). *Overview of the situation of maternal morbidity and mortality: Latin America and the Caribbean*. <https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MSH-GTR-Report-Eng.pdf>
- Lin, N. (1999). Social networks and status attainment. *Annual Review of Sociology*, 25, 467–487.
- Lugo, M. A. (2007). Comparing multidimensional indices of inequality: Methods and application. In *Inequality and poverty* (pp. 213–236). Emerald Group Publishing Limited.
- Maasoumi, E. (1986). The measurement and decomposition of multi-dimensional inequality. *Econometrica*, 54(4), 991–997.
- Marinho, M. L., Dahuabe, A. y Arenas de Mesa, A. (2023). *Salud y desigualdad en América Latina y el Caribe: la centralidad de la salud para el desarrollo social inclusivo y sostenible*. Serie Políticas Sociales (244) (LC/TS.2023/115). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Marmot, M. (2015), *The Health Gap: The Challenge of an Unequal World*, Bloomsbury Publishing.
- Matos, R. A., Adams, M., y Sabaté, J. (2021). Review: The consumption of ultra-processed foods and non-communicable diseases in Latin America. *Frontiers in Nutrition*, 8, Article 622714. <https://doi.org/10.3389/fnut.2021.622714>
- McKnight, A., Mendes Loureiro, P., y Vizard, P. (2018). Multidimensional inequality framework. International Inequalities Institute, London School of Economics and Political Science.
- Näslund-Hadley, E., y Alonzo, H. (2024). *Inequality, education, and skills in Latin America: Evidence from the regional learning assessment*. Inter-American Development Bank.
- Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., y Pfefferbaum, R. L. (2008). Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. *American Journal of Community Psychology*, 41(1), 127–150.
- Oficina Internacional del Trabajo. (2025). *Juventud en cambio: Desafíos y oportunidades en el mercado laboral de América Latina y el Caribe*. Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
- Organización Mundial de la Salud y Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud. (2008). *Subsanar las desigualdades en una generación: Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *How's life? 2020: Measuring well-being*.
- Ravallion, M. (2011). On multidimensional indices of poverty. *The Journal of Economic Inequality*, 9(2), 235–248.
- Ravallion, M. (2012a). Mashup indices of development. *The World Bank Research Observer*, 27(1), 1–32.
- Ravallion, M. (2012b). Troubling tradeoffs in the human development index. *Journal of Development Economics*, 99(2), 201–209.
- Rivadeneira, M. F., Moncayo, A. L., Córdor, J. D., Tello, B., Buitrón, J., Astudillo, F., Caicedo-Gallardo, J. D., Estrella-Proañó, A., Naranjo-Estrella, A., y Torres, A. L. (2022). High prevalence of chronic malnutrition in indigenous children under 5 years of age in Chimborazo, Ecuador: Multicausal analysis of its determinants. *BMC Public Health*, 22(1), 1977.
- Roberti, J., Leslie, H. H., Doubova, S. V., Ranilla, J. M., Mazzoni, A., Espinoza, L., Calderón, R., Arsenault, C., García-Elorrio, E., y García, P. J. (2023). Inequalities in health system coverage and quality: A cross-sectional survey of four Latin American countries. *The Lancet Global Health*, 12(1), e145–e155.
- Ruiz-Rivera, N., y Lindert, P. van. (2016). Urban segregation in Latin America. *Habitat International*, 54, 1–2.
- Sabatini, F. (2006). The social spatial segregation in the cities of Latin America. Inter-American Development Bank.

- Salazar-Xirinachs, J. M. (2023). Rethinking, reimagining and transforming: The “whats” and the “hows” for moving towards a more productive, inclusive and sustainable development model. *CEPAL Review*, 141, 11–40.
- Salazar-Xirinachs, J. M., y Llinás, M. (2023). Towards transformation of the growth and development strategy for Latin America and the Caribbean: The role of productive development policies. *CEPAL Review*, 141, 53–83.
- Santos, D. de los, y Fynn, I. (2024). From safety net to safety trap: Informality and telework during the coronavirus pandemic in Latin America. *American Behavioral Scientist*, 68(8), 1032–1051.
- Saraví, G. A. (2020). Acumulación de desventajas en América Latina: Aportes y desafíos para el estudio de la desigualdad. *Revista Latinoamericana de Población*, 14(27), 228–256.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Seth, S., y Santos, M. E. (2021). Multidimensional inequality and human development. In *The Cambridge handbook of the capability approach* (pp. 392–416). Cambridge University Press.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., y Fitoussi, J.-P. (2009). *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*. Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8131721/8131772/Stiglitz-Sen-Fitoussi-Commission-report.pdf>
- Torche, F. (2014). Intergenerational mobility and inequality: The Latin American case. *Annual Review of Sociology*, 40(1), 619–642.
- Tsui, K.-Y. (1995). Multidimensional generalizations of the relative and absolute inequality indices: The Atkinson-Kolm-Sen approach. *Journal of Economic Theory*, 67(1), 251–265.
- Trucco, D. (2014). *Educación y desigualdad en América Latina*. Serie Políticas Sociales (200) (LC/L.3846). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- United Nations Development Programme. (2010). *Human development report 2010: The real wealth of nations: Pathways to human development*.
- United Nations Development Programme. (2019). *Human development report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century*.
- United Nations Development Programme. (2024). *Human development report 2023/24: Reimagining cooperation in a polarized world*.
- Virgilio, M. M. D. (2021). Desigualdades, hábitat y vivienda en América Latina. *Nueva Sociedad*, 293, 77–92.
- Weymark, J. A. (2006). The normative approach to the measurement of multidimensional inequality. In F. Farina y E. Savaglio (Eds.), *Inequality and economic integration* (pp. 303–328). Routledge.
- Wolff, J., y de-Shalit, A. (2007). *Disadvantage*. Oxford University Press.
- World Health Organization y United Nations Children’s Fund. (2023). *Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000–2022: Special focus on gender*.

**Serie****CEPAL****Políticas Sociales**

Números publicados

Un listado completo así como los archivos pdf están disponibles en
www.cepal.org/publicaciones

- 250. Desigualdad social multidimensional: avances hacia una propuesta de medición regional, Alberto Arenas de Mesa, Andrés Espejo, Ernesto Espíndola, José Joaquín Prieto y Pablo Herrera (LC/TS.2026/47), 2026.
- 249. El mundo del trabajo frente a las transformaciones ambientales: desafíos para la inclusión laboral, Valentina Cortínez O’Ryan y Felipe Livert (LC/TS.2026/27), 2026.
- 248. Keynote lectures on social inequality: Barr, Bourguignon, Ferreira, Foster and Lustig, Alberto Arenas de Mesa, Andrés Espejo and Daniela Huneeus (Editors) (LC/TS.2026/18), 2026.
- 247. La sostenibilidad financiera de los sistemas de salud de América Latina y el Caribe: desafíos para avanzar hacia la cobertura sanitaria universal, María Luisa Marinho, Daniela Sugg y Consuelo Farías (LC/TS.2025/4), 2025.
- 246. The future of social protection in the midst of a protracted social crisis in Latin America: advancing towards universal, comprehensive, sustainable and resilient systems, Claudia Robles and Raúl Holz (LC/TS.2023/163), 2024.
- 245. Automatización del trabajo y desafíos para la inclusión laboral en América Latina: estimaciones de riesgo mediante aprendizaje automático ajustadas a la región, Ernesto Espíndola y José Ignacio Suárez (LC/TS.2023/121), 2023.
- 244. Salud y desigualdad en América Latina y el Caribe: la centralidad de la salud para el desarrollo social inclusivo y sostenible, María Luisa Marinho, Antonia Dahuabe y Alberto Arenas de Mesa (LC/TS.2023/115), 2023.
- 243. Educación en tiempos de pandemia: una oportunidad para transformar los sistemas educativos en América Latina y el Caribe, Mariana Huepe, Amalia Palma y Daniela Trucco (LC/TS.2022/149), 2022.
- 242. Pensiones de capitalización individual en América Latina: efectos, reformas, impacto del COVID-19 y propuestas de política, Carmelo Mesa-Lago (LC/TS.2022/99), 2022.
- 241. Jóvenes y familias: políticas para apoyar trayectorias de inclusión, Laís Abramo, Daniela Trucco, Heidi Ullmann y Andrés Espejo (LC/TS.2021/138) Santiago, 2021.

POLÍTICAS SOCIALES

Números publicados:

- 250 Desigualdad social multidimensional
Avances hacia una propuesta
de medición regional

*Alberto Arenas de Mesa, Andrés Espejo,
Ernesto Espíndola, José Joaquín Prieto
y Pablo Herrera*

- 249 El mundo del trabajo frente
a las transformaciones ambientales
Desafíos para la inclusión laboral

Valentina Cortínez O’Ryan y Felipe Livert

- 248 Keynote lectures on
social inequality

Barr, Bourguignon, Ferreira,
Foster and Lustig

*Alberto Arenas de Mesa, Andrés Espejo
and Daniela Huneeus (Editors)*



Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)
www.cepal.org

Versión digital disponible online



<https://bit.ly/CEPAL2026-47S>